



**DOÑA MARIA DOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.**

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día veinte de abril de dos mil dieciséis, a propuesta conjunta de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y del Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, el Consejo de Gobierno acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Decreto-ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.

SEGUNDO.- Acordar su inmediata publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y su remisión a la Asamblea Regional a efectos de su convalidación, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la presente en Murcia a veinte de abril de dos mil dieciséis.



NOTA

APROXIMACIÓN AL BORRADOR DE DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS.

Con fecha 18 de abril 2016 fue remitido al Director General de Administración Local, y el día 19 de abril, a este Servicio de Asesoramiento a Entidades Locales, vía correo electrónico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, "Borrador de Decreto Ley de Medidas Urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas", al objeto de que por este Centro Directivo se realizaran las observaciones que se estimaran pertinentes

PRIMERO: ÁMBITO DE LA PRESENTE NOTA.

Esta nota, que ha de evacuarse en tan **breve lapso de tiempo** pese a la **complejidad del asunto**, requeriría un análisis más detenido; ello no obstante, y por dicha premura, las observaciones que se efectúan a la referida norma se constriñen a una sola cuestión, la **posible vulneración de las competencias municipales y del principio de autonomía local, constitucionalmente consagrado en el art. 137 de nuestra Carta Magna.**

SEGUNDO: OBJETO DEL BORRADOR DE DECRETO LEY.

En el presente borrador de Decreto Ley, tal y como se refleja en su exposición de motivos, se abordan medias estratégicas en ámbitos como el de comercio interior, turismo, industria y medio ambiente, profundizando en las medidas de supresión de cargas burocráticas, abordándose notables modificaciones en las siguientes líneas: Dinamización del comercio minorista; Impulso de la actividad turística; Agilización en la tramitación ambiental; Y, actividad industrial, energética y minera, junto a la que se adoptan una serie de medidas transversales.

TERCERO: MARCO LEGAL DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN LA MATERIA.

1. Reconoce el art. 38 de la Constitución Española, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, debiendo los poderes públicos garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Asimismo, los poderes públicos deben garantizar a todos la efectividad del derecho proclamado en el artículo 45 de la Constitución Española, de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, para lo cual habrán de velar por la utilización racional de los recursos naturales y la defensa y restauración del medio



ambiente; y también deben esforzarse por conservar el medio ambiente los propios ciudadanos, a cuya indispensable solidaridad colectiva interpela la Constitución.

Por otra lado, la citada Carga Magna, a través de los artículos 148 y 149, llevó a cabo una distribución de las competencias ambientales entre el Estado y las comunidades autónomas, atribuyendo al Estado, como competencia exclusiva, la legislación básica sobre protección del medio ambiente, y a las comunidades autónomas su gestión y el establecimiento de normas adicionales de protección.

Por otro lado, destacar los preceptos en los que el constituyente consagra los principios generales que rigen en materia de Administración Local, a fin de que sean observados por el legislador en el ejercicio de sus competencias y en la regulación del régimen jurídico local.

El art. 137 de la Constitución, al establecer la organización territorial del Estado en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, precisa que todas esas entidades *“gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”*. Reconocimiento que es reiterado en diversos preceptos del citado Texto, entre los que destaca el art. 140 que consagra el principio de garantía institucional de la autonomía local/municipal, al disponer que *“La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales (...)”*.

A través de estos preceptos, la Constitución persigue definir y garantizar el contenido mínimo, alcance y límites de la autonomía local de los municipios, protección “constitucionalmente garantizada” que posteriormente ha sido confirmada y complementada con la regulación básica estatal y la reiterada doctrina jurisprudencial consolidada en la materia. (STS 28 de julio de 1981).

2. Recoge el Decreto Ley en su exposición del motivos, que el mismo se promulga en ejercicio de las competencias exclusivas otorgadas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la L.O. 4/1982, de 4 de junio, por al que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en concreto:

- Art. 10.Uno.11: Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
- Art.10.Uno. 29: “Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia”.
- Art.10.Uno.16: “Promoción, fomento y ordenación del turismo en su ámbito territorial”.
- Art.10.Uno.27: “Industria”.



- Art. 10.Uno.34: "Comercio Interior".
- Art. 11, apartados tercero y cuarto: competencias de desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, relativas a la "Promoción del medio ambiente" y "Régimen Minero y energético".

3. El art. 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) recoge una cláusula de capacitación general que faculta a las Entidades Locales para que, en el ámbito de sus competencias y para la gestión de sus intereses, promuevan actividades y presten servicios públicos que *"contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal" en los términos de dicho precepto.*

En relación con este ámbito competencial, básico o esencial, y de conformidad con lo previsto en el art. 25.3 del citado texto legal, solo por Ley podrán determinarse las competencias municipales sobre las materias enunciadas en el art. 25.2., de conformidad con los principios establecidos en el art. 2 de la LRBRL. Precepto que, a fin de garantizar la efectividad de la autonomía local constitucionalmente consagrada, conmina al legislador sectorial, estatal y autonómico, a *"asegurar a los Municipios, la Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente el círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera"*.

Indicar que el art. 25.2.e) de LRBRL, en relación con alguna de las materias afectadas por el presente Decreto Ley, recoge como competencias propias municipales:

- a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio Histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección públicas con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
- b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
- h) Información y promoción turística de interés y ámbito local.

Asimismo, existen diferentes normas autonómicas que atribuyen competencias a las entidades locales en algunas de las materias en las que incide el Decreto Ley que nos ocupa, como pueden ser urbanismo y medio ambiente (Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada, ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia), turismo (Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia), etc...

Y todo ello, teniendo en cuenta que el art. 1 de la Ley 6/2014, de 13 de octubre, establece que las competencias atribuidas a los municipios de la Región de Murcia por



Dirección General
de Administración Local

las Leyes de la Comunidad Autónoma anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por los mismos de conformidad con las previsiones contenidas en la norma de atribución, en régimen de autonomía y bajo su responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el art. 7.2 de la LRBRL.

CUARTO: BREVE APROXIMACIÓN AL BORRADOR DE DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS. OBSERVACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS COMPETENCIAS Y LOS INTERESES MUNICIPALES.

Analizadas muy someramente las líneas generales del Decreto Ley que nos ocupa, dado el breve espacio de tiempo con que ha contado quien suscribe la presente nota, y reiterando que la misma se circunscribe única y exclusivamente a valorar la incidencia del citado proyecto normativo, en el ámbito competencial de las entidades locales y la autonomía local, sin extenderse a ninguna otra consideración material ni formal, se indica, que:

1º) Las modificaciones operadas en la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, que pueden resumirse a grandes rasgos, en la eliminación de la licencia comercial autonómica prevista para los establecimientos comerciales con impacto supramunicipal, así como la liberalización del horario y ampliación de días festivos en los comercios, **no inciden en el ámbito competencial local.**

2º) La modificaciones introducidas en la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia, **no revisten trascendencia en el ámbito local**, estando encaminadas a facilitar la explotación de los apartamentos turísticos, y mantener la coexistencia de los establecimientos hostel-pensión.

3º) El artículo 3 del presente Decreto Ley recoge modificaciones de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, éstas de mayor calado que las anteriores y con incidencia directa en las entidades locales, en cuanto las mismas son encargadas de tramitar las "licencias de actividad", o cuanto menos, de participar en el proceso de concesión (autorización ambiental integrada).

A muy grandes rasgos, por no disponer de tiempo para realizar un análisis más pormenorizado, se destacan las siguientes modificaciones introducidas por entender que tienen repercusión e interés en el ámbito local:

- Desaparece la denominación "autorización ambiental única", entendiéndose ahora referidas a las "autorizaciones ambientales sectoriales".
- Se adapta la Ley 4/2009, de 14 de mayo, a lo dispuesto en el art. 84.bis de la LRBRL, así como a la Directiva de Servicios, eliminando la necesidad de obtener



licencia de actividad como regla general, convirtiendo la misma en requisito excepcional, cuando concurren determinadas circunstancias, dándose paso a la regla general de la comunicación previa.

Se pasa de un control previo de la actividad, a un control a posteriori, salvaguardándose las competencias y potestades de las entidades locales mediante el procedimiento de comprobación-inspección, sancionador y del restablecimiento de la legalidad, en su caso.

- Se desacopla o desglosa la licencia de actividad del resto de autorizaciones y controles autonómicos, volviéndose a la obligación de pedir la licencia de actividad al ayuntamiento. Los controles e informes propios dejan de estar integrados en la autorización autonómica, de manera que cada administración velará por sus intereses y revisará sus condiciones en el ámbito de sus competencias (todo ello excepto en la autorización ambiental integrada, que se mantiene).
- Se simplifica la relación entre la autorización ambiental integrada y la licencia de actividad, si bien la misma sigue un procedimiento de tramitación similar al que ya se estableció en la Ley 4/2009, instándose la licencia junto con la autorización, y en el mismo procedimiento, dándose participación al Ayuntamiento en aquello que es de su competencia, y resolviendo.
- En la redacción del nuevo art. 22, que aborda las modificaciones de la instalación o actividad (sustanciales y no sustanciales), se echa en falta una referencia similar a la recogida para los supuestos de autorización ambiental integral, ya que nada se dice en este precepto sobre las modificaciones en el resto de actividades que están sometidas a autorización ambiental (debido al desacople arriba indicado). No obstante lo anterior, podría entenderse que dicha cuestión queda salvada con lo contemplado al respecto en los arts. 64.1 (in fine) y .5, así como en el art. 63.1.
- Desaparece la cédula de compatibilidad urbanística, y se vuelve al informe urbanístico municipal, cuyo modelo e instrucciones aprobará la autoridad autonómica, regulándose las consecuencias de la no expedición del mismo.
- Se suprime la consulta vecinal prevista en la Ley 4/2009, sustituyéndose por una fase de información pública.
- En el art. 34.3 no quedan claras las consecuencias de la no emisión del informe del ayuntamiento, previéndose tan solo una mera "suspensión del plazo previsto para la terminación del procedimiento".
- Debido a la desintegración general de la licencia de actividad y la autorización ambiental autonómica (salvo las integradas), se da nueva redacción al título III de la Ley 4/2009, a fin de establecer el régimen de licencia y declaración



responsable, respetando la potestad reglamentaria atribuida a las entidades locales, mediante la aprobación de su correspondiente desarrollo (sin extralimitarse de sus competencias), vía ordenanzas municipales, y excluyendo del mismo las actividades sujetas a autorización ambiental integrada, para las que se contempla un régimen específico, similar al ya contenido en la norma que se modifica.

- El art. 102.2 prevé que para los instrumentos de planeamiento urbanístico objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, el ejercicio de las competencias que son propias del órgano ambiental, podrá delegarse en los ayuntamientos cuyo municipio tenga una población superior a 50.000 habitantes, y en los de menos siempre que acrediten la disposición de medios técnicos y personales necesarios para el ejercicio de la competencia.

Respecto a lo anterior, indicar que, de procederse a dicha delegación, ésta deberá realizarse en los términos del art. 27 de la LRBRL, y más allá de que en la delegación deba determinarse el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante, como se indica en el Decreto Ley, deberá respetarse lo dispuesto en el apartado 6 de dicho precepto, y es que:

“La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.”

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla”.

4º) En materia de espectáculos públicos, se recomienda que ésta no sea abordada en el presente Decreto Ley, puesto que se está trabajando en un proyecto normativo específico, y:

- En este Decreto Ley no existe una definición clara de lo que se consideran Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, cuestión primordial que ha de resolverse, y que se entiende que así ocurrirá en la norma que se está elaborando.

- En el segundo párrafo de la disposición adicional se establece que: *“ Por regla general, los espectáculos y actividades recreativas quedan sometidos a declaración responsable ante el órgano municipal competente”,* no quedando claro si están incluidos los espectáculos extraordinarios o no habituales.

- Se incluyen una serie de actividades para las que sería necesaria la licencia de actividad muy parecida a la que se incluye en el borrador de Ley de EPRM, aunque en esta última se incluye algún tipo más de actividad.



Región de Murcia
Consejería de Presidencia

Dirección General
de Administración Local

Asimismo, el problema radica en que, hoy día, no hay catálogo de actividades y definición de sus contenidos, lo cual crea una incertidumbre respecto a las actividades, que se entienden resueltas en el mencionado borrador de norma sectorial.

5º) En cuanto a las modificaciones operadas por el Decreto Ley en el Capítulo 4 (Actividad industrial, energética y minera), no parecen afectar al ámbito competencial de las entidades locales.

6º) Respecto a la modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, entre otras cuestiones, se crea la Oficina para la Defensa del Autónomo y la PYME, previéndose el impulso de la celebración de convenios de colaboración con la Administración Local para el intercambio de información relacionada con la actividad.

QUINTO: CONCLUSIONES.

En líneas generales y sin poder haber sido estudiado el texto del Decreto Ley con profundidad, las modificaciones operadas en la norma no parecen, a priori, menoscabar el principio de autonomía local constitucionalmente consagrado, en el art. 137 de nuestra Carta Magna.

Sin perjuicio de lo anterior debe indicarse que:

1º) Se ha de poner de manifiesto el error conceptual contenido en la exposición de motivos, en el apartado IV, último párrafo, in fine, donde se manifiesta que la competencia propia en materia de medio ambiente urbano corresponde a los municipios de más de 50.000 habitantes, cuando en realidad la protección del medio ambiente urbano es una materia incluida en el art. 25.2.b) de la LRBRL, atribuida a todos los municipios (no debiendo confundirse ello con los servicios mínimos obligatorias del art. 26 de la LRBRL).

2º) En el momento en que del Decreto Ley se desprendiera la atribución de nuevas competencias a los municipios, o de llevarse a cabo delegaciones, que conllevaran incremento de gasto imputable a su presupuesto, resultaría necesario proceder conforme a lo dispuesto en los arts. 7, 27 y concordantes de la LRBRL.

Murcia, 19 de abril de 2016

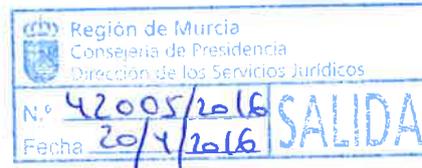
VºBº

LA JEFA DE SERVICIO DE
ASESORAMIENTO A EE.LL.

Consejería de LA ASESORA DE RÉGIMEN LOCAL



V: 21/04/2016, se valido el 20/04



En relación al borrador de Decreto-Ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, solicita informe de esta Dirección sobre las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de dicho borrador.

Las citadas disposiciones adicionales contienen sendas modificaciones de las Leyes 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno (art. 22.25), 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma (art. 16) y de la Ley 4/2004, de 23 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma (arts. 7.1 y 11.1) respectivamente.

El objeto común de estas modificaciones es permitir la interposición directa por la autoridad laboral de demandas y comunicaciones de oficio ante los Juzgados de lo Social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, eliminando la necesidad del previo informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y del Acuerdo de Consejo de Gobierno, a fin de evitar la caducidad de las acciones como consecuencia de las modificaciones producidas en la citada Ley 36/2011.



Se considera que esta modificación contribuye a dotar de mayor agilidad al procedimiento de ejercicio de las referidas acciones, por lo que se informa favorablemente.

Murcia, 19 de abril de 2016

EL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS



ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO



EXTRACTO DE DOCUMENTOS

DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS.

Orden	Nombre del documento	Tipo de acceso	Motivación del acceso parcial o reservado
1	Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.	Total	
2	Borrador de Decreto Ley	Total	
3	Informe del Servicio Jurídico de Secretaría General de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.	Total	
4	Informe del Servicio Jurídico de Secretaría General de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.	Total	
5	Informes de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente	Total	
6	Propuesta e Informe de la Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital	Total	
7	Propuesta e Informes de la Dirección General Energía y Actividad Industria y Minera	Total	
8	Propuesta e Informe de la Dirección General Comercio y Protección del Consumidor	Total	
9	Propuesta de la Dirección General de relaciones Laborales y Economía Social	Total	
10	Propuesta e Informe del Instituto de Turismo de la Región de Murcia	Total	
11	Propuesta e Informes del Instituto de Fomento de la Región de Murcia	Total	



PROPUESTA A CONSEJO DE GOBIERNO

El artículo 30.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, recoge lo siguiente:

<<En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley. No podrán ser objeto de decreto-ley la regulación de los derechos previstos en el presente Estatuto, el régimen electoral, las instituciones de la Región de Murcia, ni el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

En el plazo improrrogable de treinta días desde su promulgación, los decretos-leyes deberán ser convalidados o derogados por la Asamblea Regional después de un debate y votación de totalidad.

Sin perjuicio de su convalidación, la Asamblea Regional podrá tramitar los decretos-leyes como proyectos de ley adoptando el acuerdo correspondiente dentro del plazo establecido en el párrafo anterior. >>

El importante retraso que la Región de Murcia registra con respecto a las comunidades autónomas líderes en la materia debe solventarse ofreciendo mayores oportunidades a la libertad empresarial y atrayendo inversiones. La promoción de la reducción y simplificación de los trámites administrativos para el inicio y desarrollo de la actividad empresarial es una de las prioridades de la Administración Regional, que apuesta decididamente por impulsar la actividad en el sector privado, reduciendo las trabas administrativas.

Uno de los factores que inciden en la competitividad es el coste de tramitación para las empresas derivado de las obligaciones impuestas por las Administraciones Públicas, es por ello, que la reactivación de la actividad económica parte en buena medida de la reducción de las cargas administrativas que gravan el inicio y desarrollo de la actividad empresarial.

El presente Decreto Ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas tiene un contenido heterogéneo, pues en él se abordan medidas de distinto alcance y sobre diferentes sectores y materias, comercio interior, industria, minas, turismo, medio ambiente y otras medidas transversales, que responden a una finalidad común, adaptar la economía regional a los nuevos modelos globales de comercio y empresariales, y propiciarán la creación de empleo estable y de calidad, impulsando una economía regional mucho más competitiva, y todo ello, a través de la simplificación y eliminación de trabas administrativas vinculadas al inicio y desarrollo de las actividades económicas.

El presente Decreto ley se promulga en ejercicio de las competencias exclusivas otorgadas por el artículo 10.Uno de la L.O. 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en "Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional"(nº11), Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (nº29), "Promoción, fomento y ordenación del turismo en su



“Industria” (nº27) y “Comercio interior” (nº 34), así como las competencias de desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, recogidas en el artículo 11 apartados tercero y cuarto relativas a la “Protección del medio ambiente” y “Régimen minero y energético”.

La competencia para elevar a Consejo de Gobierno la adopción del Decreto-ley corresponde a las Consejerías de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de conformidad con el Decreto de la Presidencia número 18/2015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional, reformado por Decreto de la Presidencia nº 32/2015, de 7 de julio y Decreto de la Presidencia nº 33/2015, de 31 de julio.

Por tanto, visto el expediente sobre el borrador de Decreto-ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.3 de de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se eleva a Consejo de Gobierno la siguiente propuesta a fin de que, si lo estima conveniente, adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el Decreto-ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, cuyo borrador se acompaña como anexo a la presente.

SEGUNDO.- Acordar su inmediata publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y su remisión a la Asamblea Regional a efectos de su convalidación, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Murcia, 14 de abril de 2016

EL CONSEJERO DE DESARROLLO
ECONÓMICO TURISMO Y EMPLEO

LA CONSEJERA DE AGUA,
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE



1J16VA000012

Asunto: PROYECTO DE DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS.

Visto el borrador de Decreto-ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, a propuesta de las Direcciones Generales de Energía y Actividad Industrial y Minera, de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital, de Relaciones Laborales y Economía Social y Comercio y Protección del Consumidor, así como del Instituto de Fomento de la Región de Murcia e Instituto de Turismo de la Región de Murcia, de conformidad con el artículo 10.1.g) del Decreto 17/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica, aplicable en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto nº 43/2014, de 14 de abril, se emite el presente

INFORME

PRIMERO.- DECRETO-LEY. EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD.

El artículo 30.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, recoge lo siguiente:

<<En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley. No podrán ser objeto de decreto-ley la regulación de los derechos previstos en el presente Estatuto, el régimen electoral, las instituciones de la Región de Murcia, ni el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

En el plazo improrrogable de treinta días desde su promulgación, los decretos-leyes deberán ser convalidados o derogados por la Asamblea Regional después de un debate y votación de totalidad.

Sin perjuicio de su convalidación, la Asamblea Regional podrá tramitar los decretos-leyes como proyectos de ley adoptando el acuerdo correspondiente dentro del plazo establecido en el párrafo anterior. >>

De conformidad con lo expuesto, el Consejo de Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". El Tribunal Constitucional explica que esta expresión no se refiere a un estado de necesidad absoluta sino relativa, esto es, nacido de la correlación entre determinados objetivos estimables o importantes de la política del gobierno y la dificultad o imposibilidad de alcanzarlos si no es recurriendo a este expeditivo instrumento. En definitiva, se trata de un instrumento conectado a las dificultades de la política ordinaria. Así, el Tribunal Constitucional en su sentencia 61/1983, de 4 de febrero, afirma:

<<Lo primero quiere decir que la necesidad justificadora de los Decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el



sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales, que, por razones de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia la tramitación parlamentaria de las leyes Apoyan esta interpretación dos tipos de consideraciones: por una parte, que nuestra Constitución separe el tratamiento de la situaciones, que pueden considerarse como de extraordinaria y urgente necesidad, que dan lugar a estados de alarma, excepción y sitio, que define el art. 116, y que regule, en cambio, en otra sede sistemática diferente la necesidad justificadora de los Decretos Leyes; y por otra parte, el hecho de que el ámbito de actuación del Decreto-ley como instrumento normativo no se defina de manera positiva, sino que se restrinja de modo negativo mediante una lista de excepciones. Por todo ello hay que concluir que la utilización Decreto-Ley, mientras se respeten los límites del art. 86 CE, tiene que reputarse como una utilización constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta>>.

En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional en su sentencia 111/1983, de 2 de diciembre, afirma:

<<La extraordinaria y urgente necesidad no ha de entenderse en el sentido extremo de confiar el Decreto-ley para ordenar situaciones –o intervenir en acontecimientos- de excepcional amenaza para la comunidad o el orden constitucional. Nuestra Constitución, decíamos en la sentencia de 4 de febrero de 1983 ("Boletín Oficial del Estado" de 9 de marzo), ha contemplado el Decreto-ley como instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que, por razones difíciles de prever, reclaman una acción legislativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la tramitación parlamentaria de las leyes. La justificación del Decreto-ley podrá también darse en aquellos casos en que por circunstancias o factores, o por su compleja concurrencia, no pueda acudir a la medida legislativa ordinaria, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir en el procedimiento legislativo o por la necesidad de la inmediatitud de la medida.>>

El presupuesto habilitante del presente Decreto-ley se encuentra debida y extensamente reflejado en su Exposición de Motivos. En esta se realiza un análisis de la situación económica de la Región de Murcia, y la estrecha relación que existe entre el desarrollo económico y la eliminación y reducción de trabas administrativas. Con el fin de continuar y reforzar la senda del crecimiento económico, se van analizando en cada uno de los sectores, sobre los que incide esta disposición normativa, esa interconexión que justifica que las medidas propuestas, responden a esa necesidad extraordinaria y urgente que es la necesaria recuperación económica, y que justifica el empleo de este instrumento como acción normativa inmediata, materializadas en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación de las leyes en nuestra Asamblea Regional.

Sobre este presupuesto habilitante el Tribunal Constitucional se pronunció en su sentencia 199/2015, de 24 de septiembre de 2015, con ocasión del recurso de inconstitucionalidad nº 5099-2014, interpuesto contra el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de



Secretaría General

julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia:

“En relación con la concurrencia del presupuesto habilitante, que se conforma como un límite jurídico de la actuación normativa mediante decreto-ley (STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6), el Tribunal debe controlar su aplicación al caso concreto, pero sin que esa fiscalización, que debe limitarse a un examen externo, pueda sustituir el juicio político sobre la concurrencia del presupuesto que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley). Dicho en otros términos, el Tribunal debe controlar que el juicio político realizado por el Gobierno, que elabora el decreto-ley, y por la mayoría del Congreso de los Diputados, que lo convalida, no desborda los límites de lo manifiestamente razonable, pero «el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales Decretos-Leyes» (SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 5, y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6).

Nuestra jurisprudencia también viene afirmando que la Constitución ha adoptado «una solución flexible y matizada respecto del fenómeno del real decreto-ley que, por una parte, no lleva a su completa proscripción en aras del mantenimiento de una rígida separación de los poderes, ni se limita a permitirlo de una forma totalmente excepcional en situaciones de necesidad absoluta, de modo que la utilización de este instrumento normativo se estima legítima "en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta" (STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5)» (STC 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 3).

(...)

En segundo término, debe valorarse «que exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3), de manera que estas últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3). Para valorar la existencia de la conexión de sentido hemos de analizar, de un lado, el contenido, y, de otro, la estructura de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido (STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 3).

Así las cosas, para controlar la concurrencia del presupuesto habilitante del decreto-ley, es preciso analizar dos elementos: los motivos que habiendo sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación hayan sido explicitados de una forma razonada, y la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 3; y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

En este contexto, y como recordábamos en la reciente STC 183/2014, de 6 de noviembre, «generalmente, hemos venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que hemos denominado como "coyunturas económicas problemáticas", para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución



del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a "situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes." (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6; y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8)» (STC 183/2014, FJ 4)."

El presente Decreto Ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas tiene un contenido heterogéneo, pues en él se abordan medidas de distinto alcance y sobre diferentes sectores y materias, pero todas ellas responden a una finalidad común, establecer una serie de medidas que servirán para adaptar la economía regional a los nuevos modelos globales de comercio y empresariales, y propiciarán la creación de empleo estable y de calidad, impulsando una economía regional mucho más competitiva. La Exposición de Motivos señala que "El importante retraso que la Región de Murcia registra con respecto a las comunidades autónomas líderes en la materia debe solventarse ofreciendo mayores oportunidades a la libertad empresarial y atrayendo inversiones. La promoción de la reducción y simplificación de los trámites administrativos para el inicio y desarrollo de la actividad empresarial es una de las prioridades de la Administración Regional, que apuesta decididamente por impulsar la actividad en el sector privado, reduciendo las trabas administrativas."

Uno de los factores que inciden en la competitividad es el coste de tramitación para las empresas derivado de las obligaciones impuestas por las Administraciones Públicas, es por ello, que la reactivación de la actividad económica parte en buena medida de la reducción de las cargas administrativas que gravan el inicio y desarrollo de la actividad empresarial.

Así el Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para la Administración General del Estado señala que, con el cambio del siglo XX al XXI, el concepto de simplificación administrativa se ve superado en las agendas de los gobiernos de los países de nuestro entorno y en las recomendaciones y documentos de las organizaciones internacionales -especialmente de la UE y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-por la aparición de un nuevo concepto o programa, que en ocasiones se confunde y en ocasiones se superpone a la propia noción de simplificación. Se trata de la denominada política de reducción de trabas o cargas administrativas. Este nuevo enfoque pone el acento en los costes y obligaciones que la Administración Pública impone a empresas, ciudadanos y agentes económicos a la hora de relacionarse con ella. Estos costes y obligaciones, en la medida en que no estén justificados en razones de interés general o vengan compensados por las ventajas o beneficios que la relación con las AAPP puede proporcionarles, constituyen una carga u obstáculo que debe ser removido para posibilitar la libre actuación de empresas, agentes y ciudadanos y favorecer la competitividad y el crecimiento económico. (...)



Concretamente, para las empresas, las cargas administrativas son los *“costes que aquéllas deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, por parte de autoridades públicas o terceros, y constituyen un subconjunto de los costes administrativos de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la normativa”*.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha adoptado medidas tendentes a la influir positivamente en la productividad, inversión y competitividad de las empresas, la generación empleo y el fomento del emprendimiento. La estrecha vinculación entre la reducción de cargas burocráticas y el fomento e impulso de la actividad económica determina que el decreto-ley se erija como instrumento adecuado para atajar las situaciones económicas adversas y crear un cauce de impulso y dinamización de la actividad empresarial y económica en general, adoptando medidas que a través de este instrumento normativo tratan de dar respuesta inmediata a la necesidad de impulso por parte de los poderes públicos de la reactivación de la economía.

Para ello se abordan medidas estratégicas en ámbitos como el comercio interior, turismo, industria, profundizando en las medidas de agilización y supresión de cargas burocráticas iniciadas con la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia; con el Decreto ley 2/2014, de 21 de marzo de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la CARM, con la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública y con el Decreto Ley 4/2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las empresas, de organización y simplificación administrativa.

A su vez, se observa que el texto analizado no regula ninguna de las materias excluidas de su regulación por decreto-ley, de acuerdo con el artículo 30.3 del EARM.

SEGUNDO.- TÍTULOS COMPETENCIALES.

El presente Decreto ley se promulga en ejercicio de las exclusivas otorgadas por el artículo 10.Uno de la L.O. 4/1982, de 4 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en “Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional” (nº11), Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (nº29), “Promoción, fomento y ordenación del turismo en su ámbito territorial” (nº16), “Industria” (nº27) y “Comercio interior” (nº 34), así como las competencias de desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la



legislación básica del Estado, recogidas en el artículo 11 apartados tercero y cuarto relativas a la "Protección del medio ambiente" y "Régimen minero y energético".

TERCERO.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

El Decreto Ley se estructura en una Exposición de Motivos, cinco Capítulos, seis disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales. De forma sintética, el contenido del presente Decreto Ley es el siguiente:

El **Capítulo 1 "Dinamización de la actividad comercial"**, recoge las modificaciones a la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, relativas a la supresión de los preceptos se establecen la regulación de la licencia comercial autonómica para establecimientos comerciales que tengan impacto supramunicipal (artículos 5.3,a), 8 y artículos 11 a 17); supresión de la actual regulación limitativa del horario de apertura en días laborables para establecimientos comerciales (modificación del artículo 37) y establecimiento de un nuevo régimen de apertura en domingos y festivos, ampliando a 16 el número de días en que los establecimientos podrán permanecer abiertos.

El **Capítulo 2 "Impulso de la actividad turística"** recoge las modificaciones a la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo, dirigidas a estimular el desarrollo de este sector, en particular se modifica el artículo 4 relativo a los principios rectores para incluir la adopción de medidas de reducción de cargas burocráticas en la clasificación de empresas y actividades turísticas, se modifica el concepto de empresa turística (artículo 18.1), para eliminar la nota de profesionalidad, y se establece nueva clasificación de establecimientos hoteleros, incluyendo la diferenciación entre dos figuras de alojamiento, hostel y pensión.

El **Capítulo 3 "Agilización en la tramitación ambiental"** plasma todas las modificaciones a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, relativas a los diferentes instrumentos administrativos de control ambiental, con la finalidad de simplificar los procedimientos en esta materia.

El **Capítulo 4 "Actividad industrial, energética y minera"**, en el que se incluyen las medidas que, en el ámbito de industria, energía y minas, se introducen con la finalidad de simplificar los procedimientos administrativos que se siguen para el inicio y desarrollo de las actividades. Se establece con carácter general la presentación de declaración responsable por parte de los titulares para la puesta en servicio de instalaciones y establecimientos industriales no sujetos a autorización administrativa previa y, respecto de determinadas actividades mineras, como son la designación de Directores facultativos de explotaciones y la puesta en servicio de maquinaria minera móvil y equipos de trabajo, grupos electrógenos y líneas de distribución en explotaciones mineras a cielo abierto e



instalaciones elevadoras de aguas subterráneas en sondeos, se configuran procedimientos simplificados.

En este capítulo se recoge asimismo, en el ámbito energético, la modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, en lo relativo a los requisitos de acreditación para auditores energéticos, adaptando la ley regional al Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Asimismo se modifica el artículo 32 de la citada ley, para incluir entre las sanciones por infracciones leves, el apercibimiento.

El Capítulo 5 “Medidas transversales”. En este Capítulo se incluyen medidas de distinta naturaleza dirigidas a garantizar desde la propia Administración el impulso de la simplificación administrativa y eliminación de trabas al inicio y desarrollo de actividades económicas. En particular, por lo que respecta a los proyectos estratégicos, se procede a la modificación de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, otorgando la competencia a la Consejería competente en materia de fomento del desarrollo económico y en especial de la industria, y atribuyendo al Instituto de Fomento de la Región de Murcia la instrucción para la declaración como proyecto de interés estratégico, así como la coordinación y seguimiento. Por otro lado, se modifica el art. 8.4 relativo a la declaración de utilidad pública e interés social del proyecto a los efectos de expropiación forzosa, cuya instrumentación a través de la figura del decreto ley viene justificada suficientemente en Informe del Instituto de Fomento que se incorpora al expediente. Además, se modifica la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, en lo relativo a la Unidad de Aceleración de Inversiones, reduciendo las exigencias mínimas de creación de empleo e inversión necesarias para que un proyecto empresarial reciba la asistencia de esta unidad.

Por otro lado, se crea la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme (DEPA), cuya finalidad es la adopción de medidas que aseguren el impulso y agilización de la tramitación administrativa y de eliminación de trabas burocráticas de aquellos procedimientos que puedan sufrir retrasos injustificados, con la mayor eficacia y eficiencia posible.

Se incluyen como disposiciones adicionales, primera, segunda y tercera, las modificaciones a la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma



Secretaría General

de la Región de Murcia y a la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dirigidas a dotar de mayor flexibilidad al ejercicio de las acciones de la Autoridad Laboral en vía judicial.

Las disposiciones adicionales cuarta y quinta se refieren, respectivamente, al impulso en el uso de medios electrónicos en los procedimientos objeto del Decreto Ley, y a la aprobación por los Ayuntamientos de los modelos de declaración responsable e informe urbanístico. Y la disposición adicional sexta regula la inscripción de oficio en el Registro de Establecimientos Industriales de las industrias inscritas en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

La disposición transitoria primera regula las medidas que la entrada en vigor del Decreto Ley exige respecto a los procedimientos sobre proyectos de interés estratégico que se encuentren en trámite, y la transitoria segunda se la adaptación de las actividades al nuevo régimen de licencia y declaración responsable de actividad en la parte correspondiente a las modificaciones introducidas a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

La disposición derogatoria, recoge un pronunciamiento genérico sobre derogación de normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el Decreto-ley y, en concreto, las siguientes disposiciones:

- El artículo 8 del Decreto nº 284/2008, de 19 de septiembre, por el que se regula la competencia para resolver los expedientes sancionadores sobre infracciones en el orden social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Los artículos 4 y 5 del Decreto 65/1986, de 18 de julio, sobre distribución de competencias en materia de industrias agrarias y alimentarias entre las Consejerías de Industria, Comercio y Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- El apartado 2.3 del artículo 2 del Decreto 47/2003 de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia.
- Los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.
- Los artículos 18, 21, 24.4, 29, 30, 32.4 y 5, 41 a 44, 47 a 58, 79 a 82, 87 a 98 y 103 a 110 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:

Y las disposición finales primera y segunda establecen, respectivamente, el mandato a la Administración de inicio de adaptación de disposiciones reglamentarias en el plazo de un mes y, la entrada en vigor de la norma, que se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.



CUARTO.- PROCEDIMIENTO.

Actualmente no existe en la normativa regional regulación del procedimiento para la tramitación de los Decretos-ley, por cuanto la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia regula únicamente la iniciativa legislativa del Consejo de Gobierno prevista en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, relativa a los proyectos de ley a la Asamblea Regional (artículo 46) y la legislación delegada (artículo 47).

En el ámbito estatal hemos de remitirnos a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si bien su entrada en vigor no tendrá lugar hasta el 2 de octubre de 2016. Esta Ley, de carácter básico para todas las Administraciones Públicas dedica su Título VI a la "Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley", en su artículo 127, en relación a las disposiciones normativas con rango de ley aprobadas por el Ejecutivo, establece que el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. En esta ley no se recogen disposiciones específicas relativas al procedimiento de aprobación de normas con rango de ley por parte del Ejecutivo.

Es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la norma estatal que, como derecho supletorio, establece los requisitos formales para la tramitación de los Decretos-Ley. En su Disposición final tercera, modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en concreto el artículo 26, relativo al Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. Este precepto establece todos los requisitos formales para elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias, y en particular, por lo que a los Decretos ley interesado, el apartado 11 señala que "Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3 (MAIN), con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10 (estudios y consultas previos, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, aseguramiento de la coordinación y calidad normativa y conservación de documentos en formato electrónico).

En definitiva, no existe actualmente regulación en nuestra normativa regional sobre el procedimiento de elaboración de Decretos Ley, y en el ámbito de la Administración General del Estado, la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, llevada a cabo por la Ley 40/2015, y de aplicación supletoria, entrará en vigor el 2 de octubre de 2016, de conformidad con la Disposición final decimoctava. Por consiguiente, por lo que a la tramitación del presente expediente se refiere, no resulta exigible lo



Secretaría General

previsto en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en particular en lo concerniente a la elaboración de MAIN abreviada. Consecuentemente con ello, en la tramitación del presente Decreto Ley, y en lo concerniente al contenido propuesto por parte de esta Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, se han incorporado al expediente Informes y Propuestas de los respectivos centros directivos e institutos que han promovido la aprobación del presente Decreto-Ley, justificando cada una de las medidas que, en sus respectivos ámbitos competenciales, resultan precisas para la consecución de los objetivos de liberalización y simplificación de la actividad económica precisos para reforzar la necesaria reactivación de la economía regional.

En cuanto a los trámites posteriores, tal y como establece el artículo 30.3 del EARM, la validez del Decreto-ley está condicionada a su posterior convalidación por la Asamblea Regional en un plazo improrrogable de 30 días. De ahí que en cuanto sea aprobado por Consejo de Gobierno, deba remitirse de inmediato a la Asamblea Regional a tales efectos, así como también al Boletín Oficial de la Región de Murcia para su publicación.

QUINTO.- COMPETENCIA.

De conformidad con el Decreto de la Presidencia número 18/2015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional, reformado por Decreto de la Presidencia nº 32/2015, de 7 de julio y Decreto de la Presidencia nº 33/2015, de 31 de julio; así como en virtud de lo establecido en el Decreto de Consejo de Gobierno nº 112/2015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo (con corrección de errores mediante anuncio 8145, BORM nº 160 de 14/7/2015), modificado por Decreto nº 213/215, de 6 de agosto, la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: fomento del desarrollo económico regional; coordinación y seguimiento de los planes y proyectos de inversión singulares, estratégicos o de gran repercusión para la Comunidad Autónoma que determine el Consejo de Gobierno; turismo; apoyo empresarial; industria, energía y minas; consumo, comercio y artesanía; Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; precios autorizados y defensa de la competencia; trabajo y fomento de la economía social; empleo, mediante la intermediación y orientación laboral; fomento de las políticas activas de empleo y formación, incluida la formación ocupacional y continua, seguridad y salud laboral; Innovación empresarial y tecnológica; comunicación audiovisual, salvo lo relativo a la gestión del servicio público de comunicación audiovisual; Sociedad de la información y telecomunicaciones, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.



Secretaría General

Por su parte, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: agricultura, desarrollo rural, ganadería, industria agroalimentaria, pesca y agua, así como las que la normativa vigente le atribuye como organismo autorizado para el pago de los gastos correspondientes a la Política Agraria Común (Organismo Pagador); las relativas a la investigación y desarrollo tecnológico en los sectores agrario, forestal y alimentario, la investigación en materia de pesca, marisqueo, acuicultura marina, alguicultura y cualquier otra forma de cultivo industrial; medio ambiente, y cualquiera otras que le asigne la legislación vigente.

En consecuencia, la competencia para elevar a Consejo de Gobierno la adopción del Decreto-ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, corresponde de forma conjunta a las Consejerías de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

En cuanto a la competencia para aprobar el Decreto-ley, de conformidad con el artículo 30.3 EARM, corresponde al Consejo de Gobierno.

SEXTO.- ENTRADA EN VIGOR.

El borrador de Decreto-ley establece, en su disposición final única, que el mismo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Por tanto, el Decreto-ley adquirirá vigencia y producirá efectos desde dicha fecha, aunque con carácter provisional, pues su eficacia definitiva pende de su posterior convalidación por la Asamblea Regional, como se ha explicado.

CONCLUSIÓN

En consecuencia, en lo que a las competencias de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo se refiere, se informa favorablemente el proyecto de Decreto-ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.

Murcia, 14 de abril de 2016.
LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO

(19/04/2016)

BORRADOR DE DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS

Exposición de motivos

I

Marco socio-económico y normativo

La materialización del derecho efectivo a la libertad de empresa dentro del marco de la economía de mercado reconocido en el artículo 38 de la Constitución Española, junto al deber de los poderes públicos de garantizar su ejercicio y proceder a la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y en su caso, de la planificación, cobra especial relevancia en la situación económica actual, donde el proceso iniciado de recuperación exige incrementar, si cabe, aún más, los esfuerzos para impedir que se pueda revertir la senda de crecimiento iniciado y para sentar las bases de una economía sólida a los posibles vaivenes económicos, donde la creación de empleo estable y de calidad sea el principal objetivo.

El crecimiento del PIB murciano para 2015, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sido del 3,2 lo que sitúa a Murcia en la media de España, por delante de una decena de Comunidades Autónomas, pero por detrás de algunas de las más pujantes en el último ejercicio. Precisamente algunas de las que se sitúan por delante, especialmente significativo es el caso de Madrid, destacan por ser líderes en liberalización económica, entendida ésta en un sentido muy amplio donde se combina una importantísima reducción de los trámites administrativos, así como una notable reducción de la carga impositiva.

Numerosos análisis apuntan a la estrecha correlación existente entre prosperidad y libertad económica. El importante retraso que la Región de Murcia registra con respecto a las comunidades autónomas líderes en la materia debe solventarse ofreciendo mayores oportunidades a la libertad empresarial y atrayendo inversiones. La promoción de la reducción y simplificación de los trámites administrativos para el inicio y desarrollo de la actividad empresarial es una de las prioridades de la Administración Regional, que apuesta decididamente por impulsar la actividad en el sector privado, reduciendo las trabas administrativas.

Considerando todo lo anterior, es requisito imprescindible establecer una serie de medidas que no sólo servirán para adaptar la economía regional a los nuevos modelos globales de comercio y empresariales, sino que además propiciarán la creación de empleo estable y de calidad, impulsando una economía regional mucho más competitiva a la vez que se crea un espacio esencial de economía en libertad. Todo ello bajo una imagen de marca de calidad para atraer inversores, locales y foráneos, denominada “Región de Murcia, Libertad Económica”.

Para ello se abordan medidas estratégicas en ámbitos como el comercio interior, turismo, industria y medio ambiente, profundizando en las medidas de agilización y supresión de cargas burocráticas iniciadas con la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia; con el Decreto ley 2/2014, de 21 de marzo de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la CARM, con la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública y con el Decreto Ley 4/2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las empresas, de organización y simplificación administrativa.

El presente Decreto ley se promulga en ejercicio de las competencias exclusivas otorgadas por el artículo 10.Uno de la L.O. 4/1982, de 4 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en “Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional”(nº11), Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (nº29), “Promoción, fomento y ordenación del turismo en su ámbito territorial” (nº16), “Industria” (nº27) y “Comercio interior” (nº 34), así como las competencias de desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, recogidas en el artículo 11 apartados tercero y cuarto relativas a la “Protección del medio ambiente” y “Régimen minero y energético”.

II

Dinamización del comercio minorista

La mayor vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas en situaciones de crisis exige que el Gobierno Regional impulse los mecanismos legales que contribuyan a la generación de inversión y empleo. Por ello, una estrategia adecuada y responsable, no permite retrasar artificialmente la modernización del comercio a costa del bienestar de los ciudadanos y de la merma de la productividad y del crecimiento de la economía, siendo imprescindible potenciar la iniciativa empresarial y el emprendimiento, como elementos generadores de una mayor competitividad, dinamismo económico y bienestar social.

Los cambios en las preferencias de los consumidores que asocian consumo con ocio y bienestar, la reducción del tamaño medio de los hogares españoles, el aumento en la tasas de actividad femenina, el auge de las familias monoparentales y de los hogares unipersonales y la creciente competencia del comercio “on line”, son factores estructurales que convierten en estéril toda restricción proteccionista frente a la libertad de que dispone el consumidor de comprar “on line” de manera virtual y efectiva sin limitaciones horarias, de días festivos; o territoriales, pudiendo adquirir el producto a cualquier hora, en día no laborable o desplazarse en la misma jornada a una localidad limítrofe que no esté sometida a dichas restricciones.

Asimismo, diversos estudios empíricos han demostrado que el paso de una situación limitativa en cuanto a horarios de apertura o de control de días festivos, frente a una desregularización total, permitiría obtener un incremento de la demanda en el sector de un 9,93%. A nivel nacional, bajo la hipótesis de liberación total de horarios comerciales, teniendo en cuenta que algunas Comunidades Autónomas ya han liberalizado parcialmente sus horarios, se obtendría un incremento del PIB (2012) de un 1,63%, lo que supondría un valor aproximado de 17.187 M€, que generaría unos 337.581 puestos de trabajo en el total de la economía nacional, y facilitaría la apertura de 31.670 locales comerciales, con una disminución del porcentaje de parados de un 5,96% para el conjunto del mercado laboral español. El incremento de la demanda en el sector comercio minorista sería de un 8,2%, que equivale a un incremento del gasto en consumo final de los hogares de un 2,7% y un peso sobre la renta disponible bruta de los hogares de un 2,1%.

La necesidad de relanzar la actividad económica empresarial propiciando así la generación de inversión y empleo es lo que motiva la suma urgencia de modificar la vigente Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre el Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, dando así una respuesta ponderada y ajustada a los cambios producidos en la economía y en los hábitos de consumo como consecuencia de la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, en una economía cada vez más globalizada, haciendo una reforma normativa del articulado de la referida Ley en la que se contempla la liberalización de los horarios comerciales y la ampliación de los días festivos de libre apertura, específicamente, en los artículos 37 y 38 de la misma.

En la misma línea se encuadra la supresión de la licencia comercial autonómica o específica, - previa a la licencia municipal de obra o actividad-, prevista para los establecimientos comerciales individuales o colectivos con impacto supramunicipal. Una mayor libertad en la elección de establecimiento disminuye las presiones inflacionistas, beneficiando particularmente a los grupos sociales más desfavorecidos. Por su parte, los trabajadores incrementan la cantidad y productividad de sus puestos de trabajo y por tanto su salario de equilibrio a corto plazo, facilitándose asimismo el acceso al empleo en aquellos colectivos para los que el trabajo a tiempo parcial y la libertad de horarios es un determinante para su aceptación.

III

Impulso de la actividad turística

El concepto que la Ley de Turismo hace de la actividad económica debe considerarse en un sentido amplio, no circunscrito a figuras mercantiles cerradas y concretas que encorseten el ejercicio de la actividad, independientemente del cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan a toda persona física o jurídica.

Debe de entenderse la referencia que en el articulado de la Ley de Turismo se hace a “empresa” con un carácter amplio, como actividad generadora de riqueza, de actividad económica, no como sinónimo de entidad mercantil. Lo verdaderamente importante y urgente es facilitar por la Administración que el emprendedor o promotor pueda realizar, desde la perspectiva turística, una acción encaminada a prestar unos servicios, en este caso turísticos, por los que obtiene unos beneficios económicos que deberá reflejar en su declaración de ingresos.

Si bien con la normativa turística más reciente se ha ido reduciendo la documentación exigida para la tramitación de la clasificación de empresas y actividades turísticas mediante la presentación de declaraciones responsables, lo que ha supuesto una gran reducción de carga burocrática y de tiempo de respuesta para el administrado, la Administración regional sigue trabajando en esa línea que inspira el espíritu del presente decreto-ley, el cual añade a los principios rectores de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia un nuevo punto referente al compromiso de la Administración regional en adoptar las medidas necesarias para continuar en la línea de reducción de las cargas burocráticas.

Por otro lado para facilitar el ejercicio de la explotación de apartamentos turísticos por personas físicas, se modifica la Ley de Turismo de la Región de Murcia eliminando la referencia a un necesario carácter profesional o empresarial para realizar dicha actividad.

Finalmente, con el propósito de que coexistan dos figuras de alojamiento claramente diferenciadas de hostel y pensión, con distintos niveles atendiendo a su estructura, tipología y servicios, tal y como viene demandando el sector turístico, se modifica la Ley de Turismo de la Región de Murcia con la idea de fijar reglamentariamente unos menores requisitos para las pensiones, y un reconocimiento a aquellos establecimientos con mejores prestaciones que sin llegar a ser hoteles se asemejan más a ellos.

IV

Agilización en la tramitación ambiental

Las medidas que se acometen de corte ambiental suponen una serie de modificaciones puntuales a la normativa vigente que, continuando en la línea simplificadora iniciada en años anteriores, se abordan con un carácter provisional en tanto no se apruebe una nueva ley de protección del medio ambiente acorde con las demandas de los diferentes agentes intervinientes.

Los contenidos de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada han quedado desbordados por la sucesión de cambios normativos que la legislación ambiental estatal ha experimentado en los últimos años. Prácticamente todas las leyes ambientales básicas que fueron objeto de desarrollo por la Ley de Protección Ambiental Integrada se han visto afectadas por modificaciones profundas: la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, ha sido modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, transformando en indefinida y alterando la fisonomía de la autorización ambiental integrada, como también lo ha hecho el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; las autorizaciones de residuos, integradas en la autorización ambiental única, han recibido nueva regulación con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y las autorizaciones de calidad del aire se han visto afectadas por la citada Ley 5/2013, de 11 de junio; y por lo que respecta a la evaluación ambiental, tanto de planes y programas como de proyectos, los cambios han sido aún más profundos por obra de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El desgaste de la Ley de Protección Ambiental Integrada se hace sentir especialmente en la regulación de la licencia de actividad. Su artículo 59 sigue sujetando a licencia de actividad a “cualquier actividad mercantil o industrial”, enunciado cuya amplitud es hoy contraria al artículo 84 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, ajena al proceso de liberalización abierto por la llamada Directiva de Servicios y obstáculo cierto a la iniciativa empresarial.

La confusión normativa que reina en la materia es considerable, y una fuente de incertidumbre e inquietud para los promotores de actividades económicas, que atenaza la asunción de riesgos empresariales y dificulta la reactivación económica, especialmente en el ámbito de las PYMEs y actividades de escasa incidencia ambiental. Por imperativo de la legislación de régimen local y por la necesidad de clarificar y facilitar el marco normativo para la creación de empresas, resulta urgente convertir licencia de actividad en un requisito excepcional, dando paso a la regla general de la comunicación previa o declaración responsable.

Al amparo de estas razones, la presente norma aborda las siguientes modificaciones de carácter ambiental. En el ámbito de las autorizaciones ambientales autonómicas, se derogan los artículos o partes de ellos que son contrarios, incoherentes o desconectados de la normativa estatal reciente. Esto ocurre con toda la Sección IV del Capítulo II del Título II (arts. 41 a 44), pues la autorización ambiental integrada tiene actualmente duración indefinida, lo que excluye el régimen de solicitud de renovación o de caducidad. También se adaptan a la ley estatal de evaluación ambiental las reglas de coordinación entre la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental.

Por razones de seguridad jurídica, se precisan los criterios de modificación sustancial de actividades sometidas a autorización ambiental autonómica que, en el caso de la autorización ambiental integrada, están contenidos en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

Se simplifica la relación existente entre la autorización ambiental integrada y la licencia de actividad una vez que ésta había sido concedida, permitiendo al ayuntamiento introducir adaptaciones de las condiciones impuestas en el ámbito de la competencia local, sin necesidad de modificar la autorización ambiental integrada, con comunicación al órgano autonómico competente.

El régimen de la cédula de compatibilidad urbanística se ajusta al modelo estatal, en el que el informe urbanístico municipal no es obstativo para la tramitación del procedimiento, por lo que, si no se emite por el ayuntamiento en el plazo de un mes, se puede solicitar y tramitar la autorización ambiental integrada. Se salvan así los reparos que cabe oponer al régimen vigente, porque puede bloquear la solicitud de las autorizaciones por una inactividad municipal que no es achacable al promotor del proyecto (arts. 30 y 31.1.c). Se vuelve a la denominación de informe urbanístico municipal, propia de la legislación estatal, en lugar de la denominación de cédula de compatibilidad urbanística, cuyo alcance ha creado confusión entre los operadores jurídicos. Para clarificar el alcance del informe, se encomienda a la Consejería con competencias en materia de medio ambiente la aprobación del modelo e instrucciones precisas.

Se suprime la consulta directa a los vecinos en el procedimiento de autorización ambiental integrada, trámite inusual (si no inexistente) en la regulación que de este procedimiento hacen el resto de Comunidades Autónomas. La participación de los afectados se garantiza mediante el trámite de información pública y, si el proyecto está sujeto a evaluación ambiental, mediante la participación prevista en dicho procedimiento.

En la comunicación previa de inicio de la explotación, se suprime la exigencia de informe de ECA, que ahora deberá presentarse en el plazo de dos meses desde el inicio de la actividad. Con el sistema actual, se establece siempre como obligatorio que dicho

informe se emita cuando todavía no se cuenta con una experiencia de funcionamiento, lo que en ocasiones le priva de funcionalidad y obliga a exigir nuevos informes tras un periodo de funcionamiento, duplicando cargas y costes innecesariamente.

Pero ha sido en la autorización ambiental única donde se introduce una modificación de más calado que, resumidamente, consiste en desacoplar la licencia de actividad del resto de autorizaciones y controles autonómicos. El modelo actual de autorización ambiental única incorpora la licencia de actividad, siguiendo el mismo esquema de la autorización ambiental integrada, de forma que el promotor de la actividad no solicita separadamente la licencia de actividad, y los controles propios de la licencia de actividad se incorporan al procedimiento autonómico, a excepción del acto final del otorgamiento de la licencia, que concede el ayuntamiento cuando se notifica la autorización ambiental única. Esto conduce a que el Ayuntamiento deba participar intensamente en el procedimiento de autorización ambiental única mediante la cédula de compatibilidad urbanística, informando los aspectos de su competencia, haciendo las comunicaciones a los vecinos, etc. Pero en la experiencia de aplicación de la Ley 4/2009, esta integración autonómico-municipal se ha revelado contraproducente. La ventaja que para el promotor representa formular una única solicitud no compensa los inconvenientes derivados de flujo de comunicaciones que son necesarias entre ayuntamiento y órgano autonómico a lo largo del procedimiento. El resultado final es un retraso en la tramitación que se evitaría realizando procedimientos separados.

Con la nueva regulación, se vuelve a la obligación de pedir la licencia de actividad al ayuntamiento, y los controles e informes propios de la licencia ya no se integran en la autorización autonómica. Cada administración velará por la protección de los intereses públicos que tiene encomendados. Las autorizaciones se concederán, como es habitual en el Derecho administrativo español, sin perjuicio de otras autorizaciones, licencias o controles que sean necesarias para el lícito ejercicio de la actividad.

Dado este paso, se ha considerado innecesario mantener como tal la figura de la “autorización ambiental única”, pero se han mantenido los fines integradores de la Ley 4/2009, de modo que, cuando sea exigible más de una autorización ambiental sectorial, éstas deberán solicitarse conjuntamente y serán objeto de una sola resolución, que será desestimatoria si procediera denegar alguna de ellas. Además, las solicitudes de autorización ambiental sectorial se acompañarán de otras comunicaciones y declaraciones que deben formularse ante el órgano autonómico y que venían integrándose en la autorización ambiental única. El resultado es una integración efectiva del control ambiental autonómico, en un grado similar al existente en cuanto a la intervención autonómica se refiere. El promotor solo deberá presentar una solicitud ante el órgano ambiental para que éste realice todas las intervenciones que le corresponden, algo que no sucede en otras muchas Comunidades Autónomas.

Por razones de simplificación administrativa, y para evitar el mantenimiento de figuras de intervención propias no necesarias, el capítulo de la autorización ambiental única pasa a denominarse simplemente como Autorizaciones ambientales sectoriales, condensando en dos artículos, de manera sencilla, el nuevo esquema integrador.

En el ámbito de la licencia de actividad y declaración responsable, y por las razones más arriba apuntadas, debe introducirse una nueva regulación a nivel regional, que se incorpora a esta norma sustituyendo al título de la ley correspondiente a la licencia de actividad.

Comprende un capítulo I, de disposiciones generales, que se encabeza con el principio general de que el ejercicio de actividades económicas no se someterá a licencia de actividad, extraído de la Ley de Bases del Régimen Local. Contiene previsiones generales sobre competencia y normativa aplicable, y restablece la autorización de vertidos a la red de saneamiento como autorización específica para el caso de actividades sometidas a declaración responsable.

El capítulo II simplifica la regulación de la licencia de actividad, tanto el procedimiento general como las peculiaridades de procedimiento en el caso de actividades sometidas a autorización ambiental integrada, aunque manteniendo la fisonomía actual, añadiendo determinaciones concernientes a la comunicación de inicio de la actividad, su relación con la licencia urbanística, la modificación de oficio y la caducidad.

Las actividades sujetas a licencia de actividad se recogen en el nuevo anexo I, que incluye todas aquellas que se consideran susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico, y en las que se resulta proporcionado el control previo a través de la licencia.

El capítulo III innova el ordenamiento regional con la necesaria regulación de la declaración responsable. Se ha procurado dejar claro en ella que el ayuntamiento conserva todas sus potestades y posibilidades de actuación para hacer cumplir la legalidad aplicable a la actividad, en cuanto a la comprobación (documental y física), la inspección, la imposición de medidas correctoras, la sanción y el restablecimiento de la legalidad. En las actividades sometidas a declaración responsable, el ayuntamiento mantiene el mismo nivel de control que en las sujetas a licencia de actividad, solo alterándose el momento en que se lleva a cabo.

A cambio, el promotor de la actividad puede comenzar a funcionar, bajo su responsabilidad, tan pronto realice la declaración responsable. Como la declaración responsable solo se realiza una vez efectuada la inversión necesaria para el montaje e instalación del negocio, exigir un plazo desde su presentación para la efectiva puesta en explotación o funcionamiento supone para el promotor soportar unos costes por

inactividad que no se consideran justificados, máxime cuando el ayuntamiento puede realizar los mismos controles con plazo de antelación o sin él. La incidencia ambiental que puedan tener este tipo de actividades durante los días que median entre la declaración responsable y el primer control municipal no justifican imponer esa espera gravosa a las iniciativas empresariales de baja incidencia ambiental.

La declaración responsable debe acompañarse de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad, y señaladamente de una certificación emitida por técnico competente en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de aplicación, incluida la urbanística. No obstante, se regula el caso especial de las actividades inocuas, a las que no se exige el mencionado certificado, por cumplir condiciones rigurosas que hacen descartable cualquier incidencia ambiental y que se enumeran en el nuevo anexo II.

Para los espectáculos públicos y actividades recreativas, pendientes de la ley regional que los regule, la Ley 4/2009 se considera de aplicación solo supletoria. Provisionalmente, se introduce en disposición adicional el régimen de licencia o declaración responsable que les resulta aplicable.

Recibe nueva redacción el art. 152, regulador de las infracciones y sanciones en materia de licencia de actividad y, con esta norma, también en materia de declaración responsable.

Por último, son inexcusable las modificaciones del régimen de la evaluación ambiental, tanto de planes y programas como de proyectos, al cual la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, ha afectado profundamente. Se trata de una ley completa y prácticamente agotadora de la materia, por lo que se opta por derogar casi por completo los dos títulos de la Ley ambiental que la desarrollaban. Se realizan remisiones a la legislación estatal y se mantienen determinaciones relativas a los órganos competentes y alguna cuestión adicional. Cabe destacar que se ha reflexionado sobre el órgano llamado a desempeñar la función de órgano sustantivo a efectos de evaluación de proyectos, con el resultado de atribuir a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo ese protagonismo en los proyectos afectados por la normativa de accidentes graves; y dando también mayor protagonismo a los ayuntamientos que tienen encomendada por la Ley de Bases de Régimen Local la competencia propia en materia de medio ambiente urbano, es decir, los de más de 50.000 habitantes.

V

Actividad industrial, energética y minera

La existencia de establecimientos, instalaciones y productos cuyo funcionamiento o utilización puede producir accidentes que causen daños a las personas, los bienes o el medio ambiente, en el sector industrial, en el minero, en el de servicios, etc, ha llevado a las distintas administraciones públicas competentes a establecer disposiciones legales para reducir la probabilidad de accidentes y, si se producen, para mitigar sus consecuencias.

Estas disposiciones legales se han dictado, fundamentalmente, en dos ámbitos: por una parte, estableciendo especificaciones técnicas obligatorias para los establecimientos, las instalaciones y los productos mediante los llamados reglamentos técnicos de seguridad industrial y reglamentación minera y, por otra parte, regulando un sistema de gestión de la seguridad industrial y minera en que interviene un conjunto de agentes cuya actividad está sometida a determinadas prescripciones, condiciones y limitaciones porque afecta la seguridad.

El paulatino desarrollo de la normativa europea ha afectado profundamente los dos ámbitos anteriores. En lo que se refiere a las especificaciones técnicas relativas a los productos se ha armonizado casi totalmente su regulación, ya que mediante la marca CE se han eliminado las barreras técnicas para alcanzar la libre circulación de productos. En cambio, las especificaciones técnicas que deben cumplir las instalaciones no han sido objeto de armonización y siguen estando reguladas por las disposiciones normativas de las administraciones competentes de los estados miembros.

En la mayoría de los casos, los reglamentos de seguridad industrial y minera establecen la necesidad de la presentación de una serie de documentos para la puesta en servicio de los establecimientos e instalaciones. No obstante, la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva de Servicios, así como de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, abren las puertas a nuevos procedimientos para la puesta en servicio de establecimientos e instalaciones.

En este marco, las autoridades competentes velarán por minimizar las cargas administrativas soportadas por los operadores económicos, de manera que una vez aplicado el principio de necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirán un único medio de intervención, bien sea la presentación de una comunicación, de una declaración responsable o la solicitud de una autorización.

Con todos estos elementos, y la situación económica actual, se hace especialmente necesario y urgente adoptar todas las medidas posibles para favorecer el desarrollo económico, mediante la simplificación de los trámites administrativos y eliminando las cargas burocráticas innecesarias para el ejercicio de las actividades económicas empresariales. Entre estas medidas está la utilización de la declaración responsable en

sustitución de la presentación de documentación, para dar de alta establecimientos e instalaciones en el registro correspondiente.

Se establece un uso general de la declaración responsable para la puesta en servicio de instalaciones y establecimientos industriales no sujetos a autorización administrativa previa y, respecto de determinadas actividades mineras, se configuran procedimientos simplificados, lo cual conlleva una reducción considerable de las cargas administrativas asociadas.

Esta norma no introduce ningún nuevo requerimiento técnico obligatorio para los establecimientos, las instalaciones y los productos que son objeto de los reglamentos técnicos de seguridad industrial. Así pues, no regula ni las distintas especificaciones técnicas obligatorias, ni las características y la periodicidad de las inspecciones, ya que son materias que, por el nivel de concreción con el que deben tratarse, corresponden a la normativa específica.

De otro lado, en la actualidad las industrias agroalimentarias están sujetas a un doble registro y una doble presentación de documentación por lo que es urgente y necesario, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado unificar el mencionado registro.

Por último, la reciente entrada en vigor del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, por el que se establecen los requisitos mínimos para los profesionales, tanto auditores energéticos como proveedores de servicios energéticos, obliga a llevar a cabo la adaptación al mismo de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, en lo relativo a los requisitos de acreditación para auditores energéticos, de forma que se eliminen las restricciones al ejercicio de esta actividad de conformidad con la legislación básica.

VI

Medidas transversales

La Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, supusieron un notorio avance en el ámbito de la simplificación administrativa en aras a contribuir a la

revitalización de las actividades industriales, comerciales y de servicios en la Región de Murcia.

Para ello regulaban, por una parte, los requisitos y criterios para obtener la declaración de proyecto de interés estratégico, así como el procedimiento a seguir; y, por otra parte, se creaba la Unidad de Aceleración de Inversiones como oficina de coordinación e impulso de proyectos empresariales con especial incidencia en materia de inversión o creación de empleo, incentivando las inversiones productivas en la Región de Murcia.

Siguiendo la línea emprendida por las disposiciones indicadas, y teniendo en cuenta la experiencia contrastada del Instituto de Fomento de la Región de Murcia en el impulso de la actividad empresarial regional, enriquecida con la creación de la Unidad de Aceleración de Inversiones que ha supuesto un valioso instrumento de refuerzo de la coordinación entre administraciones públicas con incidencia directa en materia de simplificación administrativa, se considera necesario atribuir al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por razones de eficacia administrativa, la coordinación, impulso y seguimiento de la puesta en marcha de los proyectos estratégicos regionales.

Asimismo, con el objetivo de adecuar la norma a la nueva realidad económica regional tras la etapa de recesión y crisis que hemos vivido, extendiendo la simplificación administrativa a la mayor cantidad de actividades empresariales posible, la presente Ley modifica la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, reduciendo las exigencias mínimas de creación de empleo e inversión necesarias para que un proyecto empresarial reciba la asistencia de la Unidad de Aceleración de Inversiones y tenga carácter urgente y prioritario para los órganos de la Administración pública regional, agilizando su implantación y puesta en marcha.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la estructura empresarial en la Región de Murcia se caracteriza por una mayoritaria presencia de autónomos y de pequeñas y medianas empresas. La mayor vulnerabilidad que presenta éste colectivo empresarial hace que, los obstáculos y las trabas administrativas que pueden surgir durante la tramitación administrativa necesaria para la puesta en marcha o consolidación de un proyecto empresarial, puedan hacer fracasar el desarrollo de la actividad, con los efectos negativos que ello supone para la reactivación de la actividad económica.

Por ello y con objeto de promover un marco favorable que facilite y potencie el desarrollo de la actividad económica empresarial, se crea la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme (DEPA), cuya finalidad es la adopción de medidas que aseguren el impulso y agilización de la tramitación administrativa y de eliminación de trabas burocráticas de aquellos procedimientos que puedan sufrir retrasos injustificados.

A estos efectos, con objeto de garantizar el ejercicio de sus derechos al autónomo y la pyme en sus relaciones con la Administración, se establece la obligación legal de los diferentes departamentos de la Administración Regional, de atender a los requerimientos de la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme, con carácter preferente y urgente y como máximo en el plazo de diez días.

Finalmente, se incluyen como disposiciones adicionales determinadas modificaciones a la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia derivadas del presente Decreto Ley y a la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dirigidas a dotar de mayor flexibilidad al ejercicio de las acciones de la Autoridad Laboral en vía judicial. La experiencia adquirida en los últimos años, y la necesidad de evitar la caducidad de las acciones ejercidas en defensa del interés público y la legalidad, hacen preciso establecer, con el carácter de urgencia, procedimientos más eficaces y de una mayor celeridad en su tramitación para que por parte de la Autoridad Laboral se proceda a interponer ante los Juzgados de lo Social las demandas o comunicaciones de oficio contempladas en la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción Social, sin quedar condicionadas al requisito previo de la autorización de Consejo de Gobierno.

En su virtud, en uso de la autorización conferida por el artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a propuesta del Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día xx de marzo de 2016,

DISPONGO

Capítulo 1

Dinamización de la actividad comercial

Artículo 1. *Modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia.*

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia.

Uno. Se suprimen los artículos 5.3, a), 8 y el Capítulo II del Título II de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre.

Dos. Se modifica el artículo 37, que queda redactado como sigue:

“Artículo 37. *Horario semanal y diario*

El horario de apertura y cierre de los establecimientos comerciales de venta al público será de libre fijación por la empresas minoristas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los trabajadores en el régimen laboral."

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 38, que queda redactado como sigue:

"Artículo 38. *Régimen de apertura en domingos y días festivos.*

1. El número de domingos y días festivos en el que los comercios podrán permanecer abiertos al público en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será de 16 días al año."

Capítulo 2

Impulso de la actividad turística

Artículo 2. *Modificación de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia.*

Uno. Se añade un punto 12 al artículo 4, que queda con la siguiente redacción:

"Artículo 4. *Principios rectores.*

12. Adoptar las medidas necesarias para la reducción de cargas burocráticas en la clasificación de empresas y actividades turísticas."

Dos. Se modifica el apartado primero del artículo 18, que queda con la siguiente redacción:

"Artículo 18. *Empresas turísticas.*

1. Son empresas turísticas, a efectos de esta ley, las personas físicas o jurídicas que debidamente acreditadas, de manera habitual y mediante precio, se dedican a la realización de una actividad turística o a la prestación de algún servicio turístico. Se presumirá la habitualidad cuando se realice publicidad de la prestación de servicios turísticos por cualquier medio."

Tres. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 27.

"Artículo 27. *Clasificación y definiciones.*

1. Los establecimientos hoteleros se clasifican en hoteles, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones.

4. Los hostales y pensiones son establecimientos hoteleros que tanto por la dimensión del establecimiento como por la estructura, tipología o servicios no llegan a los niveles exigidos para los hoteles. Reglamentariamente se determinaran las características de cada una de estas modalidades.”

Cuatro. Se modifica el artículo 28 otorgándole la siguiente redacción:

“Artículo 28. *Apartamentos turísticos.*

Tendrán la consideración de apartamentos turísticos las unidades alojativas ofrecidas en alquiler de modo habitual y debidamente dotadas de mobiliario, instalaciones, servicios y equipo para su inmediata ocupación temporal por motivos vacacionales o de ocio, cumpliendo los requisitos que se determinen.”

Capítulo 3

Agilización en la tramitación ambiental

Artículo 3. *Modificaciones de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.*

Se introducen las siguientes modificaciones a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

Uno.- Las referencias que la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, realiza a la “autorización ambiental única”, se entienden referidas a las “autorizaciones ambientales sectoriales”, quedando sustituida la expresión “(la) autorización ambiental única” por la de “(las) autorizaciones ambientales sectoriales” en los artículos 10.1.b), 10.2, 17.1.b), 17.2, 19 y 23.1.b).

Dos.- El párrafo b) del artículo 4.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada queda redactado de la siguiente forma:

“b) El otorgamiento de la licencia de actividad y el control de las actividades sujetas a declaración responsable”.

Tres.- El apartado b) del artículo 20 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada pasa a tener la siguiente redacción:

“b) Integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales de competencia autonómica exigibles a la instalación o actividad”.

Cuatro.- Se da nueva redacción al artículo 22 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:

“Artículo 22. *Modificación de la instalación o actividad.*

1. El titular de la instalación deberá comunicar al órgano competente para otorgar la autorización ambiental autonómica las modificaciones que pretenda llevar a cabo, cuando tengan carácter sustancial, y las no sustanciales que puedan afectar al medio ambiente.

2. A fin de calificar la modificación de una instalación como sustancial se tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, en los siguientes aspectos:

- a) El tamaño y producción de la instalación.
- b) Los recursos naturales utilizados por la misma.
- c) Su consumo de agua y energía.
- d) El volumen, peso y tipología de los residuos generados.
- e) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
- f) El grado de contaminación producido.
- g) El riesgo de accidente.
- h) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
- i) La afectación a áreas protegidas y hábitats de interés comunitario.

Para la modificación de instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada, serán de aplicación los criterios de modificación sustancial previstos en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. En la modificación de instalaciones sujetas a autorización ambiental sectorial, se tendrán en cuenta dichos criterios cuando estén relacionados con el ámbito de control propio de cada autorización ambiental sectorial.

3. La comunicación que se dirija al órgano competente indicará razonadamente, en atención a los criterios señalados en el apartado anterior, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

4. Cuando el titular de la instalación considere que la modificación que se comunica no es sustancial, podrá llevarla a cabo siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental autonómica, no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

En actividades sometidas a autorización ambiental integrada, el órgano autonómico competente dará traslado al ayuntamiento de la comunicación recibida. El ayuntamiento podrá modificar de oficio la licencia de actividad imponiendo, en el ámbito de sus competencias, las condiciones adicionales que resulten procedentes como consecuencia de la comunicación.

5. Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental autonómica.

La nueva autorización ambiental autonómica que se conceda sustituirá a la anterior, refundiendo las condiciones impuestas originariamente para el ejercicio de la actividad y aquéllas que se impongan como consecuencia de la modificación sustancial de la instalación.

6. En instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada, si, en virtud de la modificación, resulta exigible una nueva autorización de las que, de acuerdo con la ley, se integran en la autorización ambiental integrada, la modificación se considerará sustancial en todo caso.

7. Cuando la modificación por sí misma esté sometida a evaluación ambiental ordinaria, la modificación se considerará sustancial en todo caso.”

Cinco.- El apartado 2 del artículo 23 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, queda redactado de la siguiente manera:

“2. En actividades sujetas a autorización ambiental integrada, cuando el ayuntamiento modifique las condiciones de la licencia de actividad, a través del procedimiento previsto en esta ley para la modificación de oficio de la licencia, lo comunicará al órgano ambiental autonómico”.

Seis.- El artículo 31 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 31. *Solicitud de autorización ambiental integrada.*

1. La solicitud de la autorización ambiental integrada se acompañará, al menos, de la siguiente documentación o información:

a) Proyecto básico suscrito por técnico competente que incluya, al menos, los aspectos a que se refiere la legislación básica estatal en materia de autorización ambiental integrada.

b) Proyecto técnico de la instalación, suscrito por técnico competente.

c) Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, que acredite de manera concluyente la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico; o copia de su solicitud, si el ayuntamiento no lo ha emitido en el plazo máximo establecido en la legislación estatal.

d) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las aguas continentales y por la legislación de costas para la autorización de vertidos desde tierra al mar.

En caso de vertidos a las aguas continentales, se hará constar expresamente si la documentación correspondiente fue ya remitida por el órgano ambiental al organismo de cuenca, a efectos de subsanación. Si el organismo de cuenca detectó deficiencias u omisiones de documentación, la documentación presentada pondrá de manifiesto las modificaciones introducidas para subsanarla o completarla.

e) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.

f) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles de conformidad con la referida legislación sectorial.

g) La documentación exigida, en su caso, por la normativa autonómica en relación con los vertidos de aguas residuales industriales a la red de saneamiento.

h) Las informaciones que la normativa de protección del medio ambiente frente al ruido exige a los proyectos de actividades.

i) En el supuesto de actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la

declaración de suelos contaminados, los informes a que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto.

2. Cuando el proyecto esté sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria de competencia autonómica, la solicitud de autorización ambiental integrada se presentará ante el órgano sustantivo a efectos de evaluación de impacto ambiental, junto con el estudio de impacto ambiental, para que sean objeto de información pública conjunta. Realizada la información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental la solicitud de autorización ambiental integrada junto con la solicitud de inicio de la evaluación ambiental ordinaria y los documentos que deben acompañarla, de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal de evaluación ambiental.

Cuando el proyecto esté sujeto a evaluación de impacto ambiental simplificada de competencia autonómica, el promotor podrá presentarla junto con la solicitud de inicio de la evaluación ambiental simplificada ante el órgano sustantivo a efectos de evaluación de impacto ambiental, el cual la remitirá al órgano ambiental de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal de evaluación ambiental; o bien podrá esperar a que recaiga el informe de impacto ambiental, y presentar entonces la solicitud de autorización ambiental integrada al órgano procedente según el resto de reglas de este apartado.

Si el proyecto no estuviese sometido a evaluación de impacto ambiental de competencia autonómica, la solicitud de autorización ambiental integrada se presentará ante el órgano sustantivo autonómico por razón de la materia o, en su defecto, el órgano competente en materia de accidentes graves. En proyectos que no sean objeto de autorización sustantiva ni estén sujetos a la normativa de control de riesgos inherentes a los accidentes graves, la solicitud se presentará directamente ante el órgano competente para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada.

3. La documentación presentada deberá estar organizada de manera que resulte fácilmente separable la relativa a las competencias locales, la relativa al vertido que en su caso se proyecte realizar a las aguas continentales y la que se refiera a cada una de las autorizaciones que en cada caso se integren en la autorización ambiental integrada.

En el caso de vertidos a las aguas continentales, el órgano ante el que se presente la solicitud remitirá la documentación correspondiente al organismo de cuenca, a efectos de subsanación”.

Siete.- Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 32 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que quedan así:

“2. Cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental ordinaria, la información pública se llevará a cabo por el órgano sustantivo competente a efectos de evaluación ambiental, de la forma establecida en la legislación estatal

3. Si la actividad está sometida a alguna de las autorizaciones sustantivas a que se refiere el artículo 15, o a la normativa de control de riesgos inherentes a los accidentes graves, el trámite de información pública se practicará por el órgano competente para otorgar la autorización sustantiva o, en su defecto, por el competente en materia de accidentes graves. La información pública se llevará a cabo mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por plazo mínimo de treinta días. El trámite será común al previsto en su caso en el procedimiento de autorización sustantiva, o en la normativa de control de riesgos inherentes a los accidentes graves.

Del resultado de la información pública se dará inmediatamente traslado al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, para que continúe la tramitación”.

Ocho.- El artículo 34 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, queda redactado así:

“Artículo 34. *Informe del ayuntamiento.*

1. El ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación emitirá informe motivado sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia, y, en particular, los relativos a residuos urbanos, ruidos, vibraciones, humos, calor, olores, polvo, contaminación lumínica y vertidos de aguas residuales a la red de saneamiento, así como los relativos a incendios, seguridad o sanitarios, y compatibilidad urbanística, si no se hubiese informado antes.

En relación con los vertidos de aguas residuales industriales a la red de saneamiento, el informe deberá contener, al menos, los extremos que señale la normativa vigente sobre vertidos a la red de saneamiento.

El informe del ayuntamiento deberá valorar las alegaciones recibidas en relación con los aspectos de su competencia, y la aplicación de las correspondientes ordenanzas locales.

Al informe se adjuntará, si se tiene constancia, copia de la resolución del procedimiento de autorización excepcional previsto en la legislación urbanística, para la realización de construcciones o instalaciones en suelo no urbanizable o urbanizable sin sectorizar.

2. El informe del ayuntamiento sólo podrá ser negativo cuando la imposición de medidas correctoras u otras condiciones no sea suficiente para evitar riesgos o daños al medio ambiente, y la seguridad y salud de las personas, o para el cumplimiento de las exigencias normativas aplicables a la instalación.

3. El plazo para emitir el informe será de dos meses desde la recepción del expediente por el ayuntamiento. En caso de no emitirse el informe en el plazo señalado, el órgano autonómico competente requerirá al ayuntamiento para que emita con carácter urgente el citado informe, concediéndole un plazo adicional máximo de 20 días naturales. El requerimiento efectuado se comunicará al promotor. Transcurridos tales plazos, continuarán las actuaciones.”

Nueve.- El artículo 36 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 36. *Declaración de impacto ambiental.*

1. La declaración de impacto ambiental, cuando resulte exigible, precederá a la autorización ambiental integrada, debiendo emitirse dentro del plazo máximo establecido por la legislación estatal.

2. Las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental se incorporarán al contenido de la autorización ambiental integrada”.

Diez.- El artículo 40 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 40. *Comunicación previa al inicio de la explotación.*

1. En el caso de instalaciones nuevas o con modificación sustancial, una vez obtenida la autorización ambiental integrada y concluida la instalación o montaje, y antes de iniciar la explotación, el titular de la instalación deberá comunicar la fecha prevista para el inicio de la fase de explotación tanto al órgano autonómico competente como al ayuntamiento que concedió la licencia de actividad.

2. Ambas comunicaciones deberán ir acompañadas de:

a) Certificación del técnico director de la instalación, acreditativa de que la instalación o montaje se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y, en su caso, los anexos correspondientes a las modificaciones no sustanciales producidas respecto de la instalación proyectada, o aquellas modificaciones derivadas de condiciones impuestas en la autorización, que se acompañarán a la certificación.

b) Declaración responsable del titular de la instalación, de cumplimiento de las condiciones impuestas por la autorización ambiental integrada y la licencia de actividad, incluyendo, en su caso, las relativas a las instalaciones de pretratamiento o depuración y demás medidas relativas a los vertidos.

3. En el plazo de dos meses desde inicio de actividad, se presentará tanto ante el órgano autonómico competente como ante el ayuntamiento certificado realizado por Entidad de Control Ambiental que acreditará el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas por la autorización ambiental integrada, en las materias de su respectiva competencia. Se acompañara asimismo, de los informes, pruebas, ensayos derivados de la normativa sectorial correspondiente.

En el caso de que se precisen ensayos posteriores o mayor experiencia de funcionamiento para acreditar que la instalación se desarrolla con las debidas garantías de respeto al medio ambiente, la seguridad y salud de las personas, se podrá exigir al titular de la actividad que, tras un plazo mayor de funcionamiento, presente un informe de Entidad de Control Ambiental u otras justificaciones relativas a los ensayos y mediciones practicados.

4. Se podrá iniciar la explotación tan pronto se hayan realizado ambas comunicaciones de manera completa, salvo que la propia autorización ambiental integrada establezca un plazo entre la comunicación y el inicio de la explotación, que no podrá exceder de un mes, para el caso de que alguna de las condiciones de funcionamiento exija comprobaciones adicionales que hayan de llevarse a cabo necesariamente antes del inicio de la explotación.

La previsión anterior se entiende sin perjuicio de las comprobaciones o controles previos regulados por la normativa industrial o sectorial que resulte de aplicación.

5. Las comunicaciones previstas en este artículo se registrarán por lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común o norma que la sustituya.

6. Una vez iniciada la actividad, tanto la consejería competente en materia de medio ambiente como el ayuntamiento, cada uno en las materias de su competencia respectiva, deberán realizar una visita de inspección de acuerdo con las prescripciones establecidas en el capítulo III del Reglamento de Emisiones Industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

Si la comprobación realizada pone de manifiesto el incumplimiento de las condiciones establecidas por la autorización ambiental integrada, la licencia de actividad o la normativa ambiental, y sin perjuicio de la sanción procedente, se ordenará el restablecimiento de la forma establecida en esta ley.

7. Las actuaciones inspectoras y de comprobación de la Consejería competente en materia de medio ambiente y del ayuntamiento se entienden sin perjuicio de las posibles comprobaciones y de las actuaciones de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental por los órganos sustantivos por razón de la materia; y de la comprobación que corresponde a la Administración General del estado respecto de las características y medidas correctoras relativas al vertido al dominio público hidráulico.

8. La comunicación previa de inicio de la explotación no es exigible para las instalaciones existentes, a las que el órgano competente exigirá durante la tramitación del procedimiento los documentos y justificaciones a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo establecido para la legalización de actividades”.

Once.- Se modifica el capítulo III del título II de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que pasa a denominarse “Autorizaciones ambientales sectoriales”, y comprenderá solo dos artículos, numerados como 45 y 46, con la redacción siguiente:

“Artículo 45.- *Remisión a la normativa estatal.*

1. Son autorizaciones ambientales sectoriales las exigidas por la normativa estatal, y comprenden: las relativas a la gestión de residuos, reguladas por la legislación de residuos; las de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, reguladas por la legislación de calidad del aire y protección de la atmósfera; y las de vertidos al mar, reguladas por la legislación de costas.

2. Para la implantación de instalaciones o actividades, la Consejería competente en materia de medio ambiente no exigirá otras autorizaciones que las establecidas por la legislación estatal.

Artículo 46.- Coordinación de actuaciones y trámites ambientales.

1. Cuando sea exigible más de una autorización ambiental sectorial, éstas deberán solicitarse conjuntamente y serán objeto de una sola resolución, que será desestimatoria si procediera denegar alguna de ellas.

2. A las solicitudes de autorización ambiental sectorial se acompañará:

a) La documentación necesaria de acuerdo con la normativa estatal reguladora de la autorización.

b) La comunicación de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera en el caso de estar sujeto a ella (grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera), o justificación de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

c) Comunicación previa al inicio de la actividad de producción y gestión de residuos, si resulta exigible, o justificación de haber realizado dicha comunicación previa ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

d) Informes a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, en el supuesto de actividades incluidas en su ámbito de aplicación.

3. Las solicitudes se presentarán ante el órgano sustantivo a efectos de evaluación de impacto ambiental, junto con la solicitud de inicio de evaluación ambiental ordinaria o simplificada, el cual la remitirá al órgano ambiental cuando proceda según la legislación estatal de evaluación ambiental. Si el proyecto no está sujeto a evaluación de impacto ambiental de competencia autonómica, las solicitudes se presentarán ante el órgano competente para concederlas.

4. El plazo máximo para resolver y notificar las autorizaciones ambientales sectoriales será de seis meses, a contar desde la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

5. No se concederán las autorizaciones ambientales sectoriales sin el previo informe de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, cuando resulten exigibles”.

Doce.- Recibe nueva redacción todo el título III de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, de la siguiente forma:

“TÍTULO III

Régimen de la licencia y la declaración responsable de actividades

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 59. Control preventivo de las actividades.

1. Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia de actividad.

2. No obstante, quedan sometidas a licencia de actividad las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de las actividades que aparecen relacionadas en el Anexo I, por ser susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico.

3. Por razones de orden público, seguridad pública, salud pública y protección del medio ambiente en el lugar donde se realiza la actividad, el ejercicio de actividades no sometidas a licencia deberá ser objeto de una declaración responsable ante el órgano municipal competente.

En estos casos el promotor voluntariamente podrá solicitar del Ayuntamiento la comprobación y certificado del cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.

4. A los efectos de esta ley, se entiende por “actividades” las realizadas en instalaciones ganaderas, mineras, industriales, comerciales o de servicios, que se ejerzan con carácter empresarial, ya sean de titularidad pública o privada.

Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, tenga o no carácter lucrativo.

Quedan excluidas las actividades necesarias para la explotación agrícola, pero no las industrias de transformación agroalimentaria.

De las actividades ganaderas, quedan excluidas las instalaciones de carácter doméstico que se enumeran en el anexo III.

5. La licencia de actividad o la declaración responsable reguladas en esta ley no eximen de la obtención de otras autorizaciones o de la formalización de comunicaciones o declaraciones que resulten exigibles para el ejercicio de determinadas actividades, en particular en materia urbanística, industrial, de seguridad, turística, sanitaria, ganadera, educativa, de patrimonio cultural y comercial.

6. Los espectáculos públicos y actividades recreativas se regirán por su legislación específica y, en su defecto, por lo previsto en esta ley.

Artículo 60. *Normativa aplicable.*

La licencia y la declaración responsable de actividad se regirán por la presente ley y las disposiciones que le resulten de aplicación contenidas en la legislación de régimen local y en la legislación urbanística. Los ayuntamientos podrán desarrollar este régimen normativo mediante las correspondientes ordenanzas municipales.

Artículo 61. *Órganos competentes.*

Los órganos municipales competentes para el otorgamiento de la licencia de actividad y el control de las actividades sometidas a licencia y declaración responsable se determinarán conforme a lo establecido en la legislación aplicable en materia de régimen local.

Artículo 62. *Control de los vertidos industriales a la red de saneamiento.*

1. El control de los vertidos industriales a la red de saneamiento se realiza a través de la autorización ambiental integrada y de la licencia de actividad, en las actividades sujetas a ellas.

2. Los vertidos industriales a la red de saneamiento de las actividades sujetas a declaración responsable serán objeto de una autorización municipal específica, siendo de aplicación el Decreto regional nº 16/1999, de 22 de abril, sobre Vertidos de Aguas Residuales Industriales al Alcantarillado. Se entenderá estimada la solicitud de autorización si no ha recaído resolución en el plazo de tres meses desde que haya tenido entrada en el registro del ayuntamiento.

No están sometidos a autorización los vertidos realizados por actividades industriales que consistan únicamente en vertidos de carácter sanitario.

3. El Consejo de Gobierno podrá fijar reglamentariamente los vertidos prohibidos y las concentraciones máximas admisibles, así como cualquier otra condición necesaria para garantizar la calidad ambiental de los vertidos industriales a la red de saneamiento. Estas determinaciones serán requisitos mínimos que deberán incorporarse a las correspondientes ordenanzas municipales y se tendrán en cuenta en el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, de la licencia de actividad y de la autorización de vertidos industriales a la red de saneamiento.

CAPÍTULO II

Licencia de actividad

Artículo 63. Alcance y duración de la licencia

1. La licencia de actividad tiene por objeto verificar si la instalación o modificación sustancial de una actividad reúne aquellos requisitos exigibles para evitar daños al medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas o el patrimonio histórico.

2. La licencia de actividad tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las limitaciones temporales que pueda imponer la legislación o el planeamiento urbanístico cuando se trate de usos provisionales.

3. La licencia de actividad perderá su vigencia si, una vez iniciada, se interrumpiera durante un plazo igual o superior a un año. No obstante, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia antes de que transcurra dicho plazo. El órgano municipal podrá acordar la prórroga en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para otorgar la licencia de actividad.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que la actividad ha cesado o ha sido interrumpida por su titular cuando conste la baja de la actividad comunicada ante otras administraciones públicas, o ante las compañías suministradoras de agua y energía, así como cuando existan signos externos de cese de la actividad, debidamente justificados en el expediente.

Constatadas por el ayuntamiento las circunstancias anteriores, dictará resolución declarando la pérdida de la vigencia de la licencia concedida, previa audiencia al interesado. La resolución así adoptada podrá ser objeto de los recursos que procedan.

Artículo 64. *Procedimiento de licencia de actividad*

1. El procedimiento se inicia mediante solicitud dirigida al ayuntamiento, que se acompañará, como mínimo, de la siguiente documentación, sin perjuicio de la que puedan establecer los ayuntamientos mediante ordenanza:

a) Proyecto de actividad, suscrito por técnico competente identificado mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad, y visado por el colegio profesional correspondiente cuando sea legalmente exigible, que contenga una descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, de reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a ruidos, vibraciones, humos, calor, olores, polvo, contaminación lumínica y vertidos a la red de saneamiento y, en su caso, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y cualesquiera otros que se contemplen en las ordenanzas municipales.

b) Cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, o justificación de haber realizado la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada. En este caso, no se concederá la licencia de actividad hasta que recaiga informe de impacto ambiental y/o declaración de impacto ambiental que resulte exigible, pudiendo el ayuntamiento suspender el procedimiento hasta que reciba el informe o declaración, comunicándolo al interesado.

c) La documentación exigida por la normativa aplicable en relación con los vertidos de aguas residuales industriales a la red de saneamiento y para la protección del medio ambiente frente al ruido, salvo que la misma esté ya incorporada al proyecto técnico.

d) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable.

e) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.

f) Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos del trámite de información pública.

g) En el caso de actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial, copia de la autorización o autorizaciones exigibles, o de su solicitud si se encuentran en trámite.

En caso de presentarse la documentación en papel, se adjuntará copia digitalizada en soporte informático de la totalidad de la documentación técnica aportada.

En los supuestos de modificación sustancial de la actividad previamente autorizada, la solicitud debe ir referida específicamente a las partes de la actividad y a los aspectos afectados por la modificación.

2. El órgano municipal competente podrá requerir la subsanación de la solicitud; o denegar motivadamente la licencia por incumplimiento de los requisitos establecidos, previa audiencia al interesado por plazo no inferior a quince días.

En otro caso, el expediente se someterá a información pública en la forma establecida en las respectivas ordenanzas; y se recabarán los informes técnicos que resulten necesarios.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de otorgamiento o denegación de licencia de actividad será de seis meses, transcurridos los cuales se entenderá estimada la solicitud.

El otorgamiento por silencio administrativo de la licencia de actividad no concede facultades a su titular en contra del planeamiento urbanístico o de la legislación sectorial aplicable.

4. El procedimiento de obtención de la licencia de actividad a que se refieren los apartados anteriores no es de aplicación en actividades sujetas a autorización ambiental integrada, para las que se seguirá lo dispuesto en el artículo siguiente.

5. Las modificaciones no sustanciales, los cambios de titularidad y el cese de las actividades deben ser previamente comunicados al órgano municipal competente.

El cambio de titularidad se deberá comunicar por el adquirente en el plazo máximo de un mes desde que se produjo la transmisión, aunque podrá también comunicarlo el transmitente para liberarse de las responsabilidades y obligaciones que le corresponden como titular de la licencia.

Artículo 65. Procedimiento en actividades sujetas a autorización ambiental integrada.

1. En actividades sometidas a autorización ambiental integrada, la licencia de actividad se entiende instada con la solicitud de autorización ambiental integrada. La denegación de esta última conlleva la de la licencia de actividad, sin necesidad de resolución expresa municipal.

2. La tramitación de la licencia de actividad se llevará a cabo a través del procedimiento de autorización ambiental integrada, con la participación del ayuntamiento en la determinación de las condiciones a que debe sujetarse la actividad en los aspectos de su competencia de la forma establecida en el Título II, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal concediendo la licencia.

3. El ayuntamiento deberá resolver sobre la licencia de actividad y notificarla al interesado tan pronto reciba del órgano autonómico competente la comunicación sobre el otorgamiento de la autorización ambiental integrada y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la comunicación. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique el otorgamiento de la licencia de actividad, ésta se entenderá concedida con sujeción a las condiciones que en su caso figuren en la autorización ambiental integrada como relativas a la competencia local.

La autorización ambiental integrada será vinculante para la licencia de actividad cuando implique la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

4. Son nulas de pleno derecho las licencias de actividad que se concedan sin la previa autorización ambiental integrada, cuando resulten exigibles.

Artículo 66. Licencia de actividad y licencia urbanística.

1. En los supuestos en que sea preceptiva la licencia de actividad y, además licencia urbanística, serán objeto de una sola resolución. Si procediera denegar la licencia de actividad, se notificará así al interesado y se entenderá asimismo denegada la segunda.

2. No se concederá licencia urbanística sin el otorgamiento de la licencia de actividad que en su caso proceda, cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación se destine al ejercicio de una actividad de características determinadas.

Artículo 67. Comunicación de inicio de la actividad.

1. Obtenida la licencia de actividad y concluida la instalación o montaje, y antes de iniciar la explotación, el titular de la instalación deberá presentar una comunicación indicando la fecha prevista para el inicio de la fase de explotación y acompañando las justificaciones establecidas en la licencia de actividad.

2. Esta comunicación no procederá en los casos de legalización de actividades, debiendo el órgano competente exigir al solicitante, durante la tramitación del procedimiento de legalización, las justificaciones necesarias para acreditar que la instalación o actividad existente se ajustan a la solicitud y documentación presentada.

3. La comunicación de inicio de la actividad deberá realizarse en el plazo que se fije en la propia licencia de actividad, o, en su defecto, en el de dos años a contar desde la notificación de la licencia, transcurrido el cual la licencia de actividad perderá su vigencia de no haberse realizado la comunicación.

Artículo 68. Modificación de oficio de la licencia de actividad.

1. La licencia de actividad podrá modificarse de oficio cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.

2. El procedimiento de modificación de oficio se iniciará mediante una resolución que especifique motivadamente los aspectos de la licencia que se pretenden modificar, que será notificada al titular de la licencia de actividad, indicando, en su caso, la documentación que deberá aportar para llevar a cabo la modificación.

CAPÍTULO III

Declaración responsable de actividad

Artículo 69. Finalidades.

1. El régimen de declaración responsable de actividad persigue los siguientes fines:

a) El reconocimiento del derecho de iniciar el ejercicio de las actividades sin necesidad de autorización u otro acto administrativo previo otorgado por la administración, sin perjuicio del sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

b) Simplificar las cargas administrativas a los operadores económicos de modo que se mantenga su control, solo alterándose el momento en el que se lleva a cabo.

2. Las actividades declaradas se ejercerán bajo la exclusiva responsabilidad de los promotores de la actividad, de las entidades de control y del personal técnico que suscriba la documentación que acompaña a la declaración responsable. La presentación de la declaración responsable de actividad no prejuzga en modo alguno que las condiciones del establecimiento se acomoden a la normativa aplicable.

Artículo 70. Presentación de la declaración responsable de actividad.

1. La declaración responsable de actividad podrá presentarse una vez concluidas las obras y las instalaciones necesarias y, en su caso, obtenidas las autorizaciones o realizadas las actuaciones exigidas por la normativa de carácter sectorial aplicable a la instalación o actividad, y antes de que comience el ejercicio de la actividad o fase de explotación.

2. Se formalizará de acuerdo con el modelo aprobado que a tal efecto, que se encontrará disponible en la página web del correspondiente ayuntamiento.

El ayuntamiento velará para que los requisitos que deben constar estén recogidos de manera expresa, clara y precisa en la declaración responsable de actividad.

3. En la declaración responsable el interesado manifestará bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar, que posee la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la actividad.

4. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la declaración responsable, debidamente suscrita por el interesado, deberá acompañarse al menos de la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva de la actividad.

b) Certificación emitida por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre y apellidos, titulación y documento nacional de identidad, en la que se acredite la adecuación de la instalación a la actividad que vaya a desarrollarse, y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación.

La certificación incluirá un pronunciamiento expreso sobre la compatibilidad de la instalación con el planeamiento y normativa urbanística.

c) Justificación de haber obtenido las autorizaciones o formalizado las comunicaciones o declaraciones exigibles por la normativa de carácter sectorial.

d) En el caso de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas a notificación (grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera), justificación de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

e) Si se trata de una actividad sujeta a comunicación previa al inicio de la actividad de producción y gestión de residuos (artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), justificación de haber realizado dicha comunicación previa ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

f) Autorización municipal de vertidos industriales a la red de saneamiento, cuando resulte exigible.

g) Autorización o concesión para la ocupación o utilización del dominio público, cuando resulte exigible.

h) Justificante del pago de la tasa, cuando resulte exigible.

5. Los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas, podrán especificar o ampliar el alcance que ha de tener la declaración responsable en cuanto al cumplimiento de otros requisitos exigidos por la normativa aplicable para el funcionamiento de la actividad, o desarrollar la documentación que ha de acompañar a la declaración responsable.

Artículo 71. Declaración responsable en el caso de actividades inocuas.

1. Son actividades inocuas aquellas que, por cumplir todas las condiciones establecidas en el anexo II de esta ley, no cabe esperar que tengan incidencia significativa en el medio ambiente, la seguridad o salud de las personas.

2. Para el ejercicio de las actividades inocuas, el certificado emitido por técnico competente a que se refiere el párrafo b) del apartado 4 del artículo anterior podrá sustituirse por otro que acredite el cumplimiento de las todas las condiciones establecidas en el anexo II.

En este caso, solo será necesario acompañar a la declaración responsable el certificado de cumplimiento de todas las condiciones del anexo II, pero el declarante deberá cumplir con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, incluido en su caso el de estar en posesión de la documentación que así lo acredite.

Artículo 72. Declaración responsable en el caso de actividades de comercio y determinados servicios.

1. Para el ejercicio de las actividades incluidas en el título I y el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ampliadas por las recogidas en el capítulo II del título II y el anexo de la Ley regional 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública, bastará la presentación de la declaración responsable regulada en estas leyes, con la manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda.

2. Estas actividades deberán contar con el certificado de cumplimiento de todas las condiciones del anexo II, o, cuando no reúnan dichas condiciones, con el certificado a que se refiere el párrafo b) del apartado 4 del artículo 70, para su exhibición cuando sea requerido por el ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones de comprobación o inspección.

Artículo 73. Efectos de la declaración responsable de actividad.

1. La declaración responsable de actividad permitirá al interesado la apertura e inicio de la actividad desde el mismo momento de su presentación, sin perjuicio de las autorizaciones o de otras comunicaciones o declaraciones que resulten en su caso exigibles por la normativa sectorial.

2. Las actividades sometidas a declaración responsable están sujetas en todo momento al régimen administrativo de comprobación, inspección, sanción, restablecimiento de la legalidad ambiental previsto en esta ley y, en general, de control que corresponde al ayuntamiento en relación con la actividad.

Artículo 74. Consecuencias derivadas del control de las actividades sometidas a declaración responsable.

1. Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que la normativa aplicable exige para el ejercicio de la actividad, el ayuntamiento podrá realizar en cualquier momento la comprobación documental de la declaración responsable, así como comprobaciones físicas mediante visitas a la instalación.

2. La falta de presentación de la declaración responsable de actividad, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, determinará, previo trámite de audiencia, la imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Cuando se trate de defectos subsanables, en el trámite de audiencia se podrá requerir al interesado para que presente la declaración responsable o complete la documentación, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

La resolución del ayuntamiento que declare el incumplimiento podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente.

3. Cuando se realicen visitas de comprobación de las instalaciones, si de los resultados de la visita se detectasen deficiencias subsanables, se otorgará al interesado un plazo para corregir los defectos advertidos. Una vez subsanados, el interesado lo comunicará al ayuntamiento, que podrá efectuar una nueva visita de comprobación para verificar si se ha atendido el requerimiento de subsanación.

En caso de incumplimiento del requerimiento, o en el supuesto de haberse detectado en la visita de comprobación deficiencias insubsanables, el ayuntamiento dictará resolución motivada que impedirá el ejercicio de la actividad, previa audiencia del interesado.

4. El ayuntamiento podrá efectuar las visitas de comprobación previstas en este artículo por sus propios medios o mediante Entidades de Control Ambiental.

Artículo 75. Imposición de prescripciones técnicas y medidas correctoras.

1. El órgano municipal competente podrá de oficio, en cualquier momento, imponer al promotor de actividades sujetas a declaración responsable las prescripciones técnicas y medidas correctoras que resulten exigibles por la normativa sectorial aplicable para garantizar la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas.

2. La resolución que imponga las prescripciones técnicas y medidas correctoras será motivada y se dictará previa audiencia de los interesados, pudiendo ser objeto del recurso administrativo o contencioso-administrativo que proceda.

Artículo 76. Comunicación de modificación y cese de la actividad.

Están sometidas al régimen de comunicación previa las modificaciones de la actividad que no implique un cambio en el instrumento de intervención, y el cese temporal o definitivo de la misma. La modificación habrá de comunicarse con la antelación mínima de un mes, pudiendo el ayuntamiento, a través de ordenanza, reducir o suprimir dicho plazo.

Si la modificación supone un cambio en el instrumento de intervención, deberá someterse al régimen que corresponda.

Artículo 77. Toma de conocimiento.

La copia de la declaración responsable de actividad, debidamente registrada, tendrá la consideración de toma de conocimiento por la Administración. Este documento deberá conservarse en el establecimiento en que se desarrolle la actividad para conocimiento y control de la Administración.

Artículo 78. Cambio de titularidad de actividad.

El cambio de titularidad de la actividad exigirá la presentación por el nuevo titular de una comunicación en el plazo máximo de diez días desde que se hubiera formalizado la transmisión, sin perjuicio de la comunicación que pueda realizar el transmitente. No será necesaria la presentación de la documentación técnica que hubiera aportado el anterior titular si se mantienen las condiciones de la actividad. El nuevo titular podrá continuar el ejercicio de la actividad desarrollada por el anterior titular tan pronto efectúe la comunicación”.

Trece.- Los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, quedan redactados de la siguiente forma:

“Artículo 83. Remisión a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental.

Es de aplicación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental, sin más particularidades que las contenidas en esta ley y en la normativa reguladora de los procedimientos de autorización o aprobación de proyectos.

Artículo 84. *Proyectos sometidos a evaluación ambiental de proyectos.*

1. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria y simplificada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia únicamente los proyectos comprendidos en la legislación básica estatal.
2. A efectos de lo establecido en el artículo 7.2 c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se entenderá que una modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga un incremento de más del 15 por 100 de emisiones a la atmósfera, de vertidos a cauces públicos o al litoral, de generación de residuos, de utilización de recursos naturales o de afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de las directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.

No obstante, tratándose de proyectos comprendidos en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, si el incremento supera el 50 por 100 de los citados parámetros, la modificación estará sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Artículo 85. *Órgano ambiental y órgano sustantivo.*

1. Corresponde a la Consejería con competencias en materia de medio ambiente ejercer las funciones de órgano ambiental cuando se trate de la evaluación ambiental de proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o las entidades locales de su ámbito territorial, o que deban ser objeto de declaración responsable o comunicación previa ante las mismas.
2. Para la determinación del órgano sustantivo autonómico o municipal en el ámbito de la Región de Murcia, se tendrán en cuenta sucesivamente las siguientes reglas:
 - a) En primer lugar, cuando el proyecto esté sometido a autorización o aprobación del órgano autonómico competente por razón de la materia, será este el que tenga la condición de órgano sustantivo a efectos de evaluación de impacto ambiental.
 - b) Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a

los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, será órgano sustantivo el órgano autonómico competente en materia de accidentes graves.

c) Cuando se trate de proyectos sometidos a autorización ambiental autonómica, distintos de los anteriores, el órgano sustantivo será la Consejería con competencias en materia de medio ambiente si el municipio en que se ubica la instalación no supera los 50.000 habitantes; y el ayuntamiento en aquellos municipios de población superior a 50.000 habitantes.

d) En los proyectos no sometidos a autorización ambiental autonómica, distintos de los previstos en los apartados a) y b), el ayuntamiento”.

Catorce.- Los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, quedan redactados así:

“Artículo 100. Remisión a la legislación estatal de evaluación ambiental estratégica.

Es de aplicación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la legislación estatal de evaluación ambiental estratégica, sin más particularidades que las contenidas en esta ley, en la legislación urbanística y demás normativa reguladora de los procedimientos de elaboración y aprobación de planes y programas.

Artículo 101. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los planes y programas, así como sus modificaciones, que se determinan por la legislación básica estatal de evaluación ambiental, la legislación urbanística u otra legislación reguladora de los procedimientos de elaboración y aprobación de planes y programas.

Artículo 102. Administración competente y órgano ambiental.

1. En el caso de planes y programas cuya elaboración y aprobación corresponda a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o a las entidades locales, tendrá la condición de órgano ambiental la Consejería con competencias en materia de medio ambiente.

2. Para los instrumentos de planeamiento urbanístico objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, el ejercicio de las competencias que son propias del órgano ambiental podrá delegarse en los ayuntamientos cuyo municipio tenga una población superior a 50.000 habitantes, y en los de menos siempre que

acrediten la disposición de medios técnicos y personales necesarios para el ejercicio de la competencia.

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante”.

Quince.- Recibe nueva redacción el artículo 152 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:

“Artículo 152. Infracciones y sanciones en materia de licencia y declaración responsable de actividad

1. Son infracciones muy graves las conductas tipificadas como infracción grave, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.

2. Son infracciones graves:

a) La instalación, montaje, ejercicio o explotación, traslado o modificación sustancial de una actividad sin contar con la licencia de actividad o sin realizar la declaración responsable de forma completa y con la antelación establecida.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, prescripciones técnicas o medidas correctoras, así como no tomar las medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más breve posible.

c) El incumplimiento de las medidas establecidas para el restablecimiento de la legalidad ambiental.

d) El incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el ejercicio de las actividades sujetas a declaración responsable.

e) La puesta en marcha de actividades sujetas a licencia de actividad, sin realizar la comunicación previa de inicio de la actividad, acompañando la documentación que resulte exigible.

f) Ocultar o alterar maliciosamente la información que debe ser aportada en los procedimientos, declaraciones y comunicaciones regulados en esta ley, o falsear los certificados o informes técnicos presentados a la administración.

g) No informar inmediatamente al órgano competente de cualquier incidente o accidente que afecten de forma significativa al medio ambiente.

h) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección o control.

3. Constituyen infracción leve:

a) Incurrir en demora no justificada en la aportación de documentos solicitados por la Administración.

b) No comunicar al órgano competente con la antelación establecida las modificaciones no sustanciales que se lleven a cabo en las instalaciones o actividades.

c) Adquirir la titularidad de la actividad sujeta a licencia sin comunicarlo al órgano competente dentro del plazo establecido.

d) No efectuar la comunicación previa de cese de la actividad al órgano competente.

e) El incumplimiento de las prescripciones establecidas en esta ley, cuando no esté tipificado como infracción muy grave o grave.

4. La comisión de infracciones tipificadas en este artículo se sancionarán de la siguiente forma:

a) Las infracciones muy graves, con multa desde 60.001 hasta 300.000 euros.

b) Las infracciones graves, con multa desde 2.001 hasta 60.000 euros.

c) Las infracciones leves, con multa de hasta 2.000 euros.

5. Corresponde a los ayuntamientos la imposición de sanciones por las infracciones tipificadas en este artículo.

6. Cuando se trate de actividades incluidas en el ámbito de aplicación del título I y el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, el régimen sancionador aplicable será el establecido en dicha norma.”

Dieciséis.- Se da nueva redacción a la disposición transitoria segunda de la ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección ambiental integrada, en los siguientes términos:

“Disposición transitoria segunda. Adaptación al nuevo régimen de las autorizaciones ambientales sectoriales

1. Los procedimientos de autorización ambiental única que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta norma, se tramitarán con arreglo al régimen jurídico aplicable al tiempo de su solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá desistir del procedimiento y solicitar las autorizaciones ambientales sectoriales que correspondan y la licencia de actividad según la nueva regulación, pudiendo en los nuevos procedimientos convalidarse las actuaciones que resulte procedente.

2. A las instalaciones en funcionamiento que actúen al amparo de una autorización ambiental única y una licencia de actividad, les será de aplicación el régimen propio de las autorizaciones ambientales sectoriales y de la licencia de actividad previsto en esta ley y en la legislación ambiental estatal. Las condiciones que figuran en las autorizaciones ambientales únicas se consideran condiciones propias de las autorizaciones ambientales sectoriales a que se refieran.

3. A las autorizaciones ambientales sectoriales y las licencias de actividad obtenidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, les será de aplicación el régimen propio de las autorizaciones ambientales sectoriales y de la licencia de actividad regulado en esta ley y en la legislación ambiental estatal”.

Diecisiete.- Se da nuevo contenido a los Anexos I, II y III de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que quedan de la siguiente forma:

ANEXO I

Actividades sometidas a licencia de actividad

1. las actividades sometidas a autorización ambiental integrada.
2. Las actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial.
3. Las actividades económicas privadas cuyo proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental ordinario o simplificado.
4. Las actividades que se desarrollen en inmuebles de interés cultural.
5. Los espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando lo establezca su normativa específica.

6. Las actividades ganaderas que no estando sometidas a autorización ambiental autonómica ni a evaluación de impacto ambiental, dispongan al menos de:

- Reproductores vacunos: 50 cabezas.
- Vacunos de cebo: 100 cabezas.
- Reproductores de ovinos y/o caprinos: 300 cabezas.
- Cebaderos de ovino y/o caprino: 750 cabezas.
- Cerdas reproductoras: 250 cabezas.
- Cerdos de cebo: 1000 cabezas.
- Ganado equino (caballos, asnos, mulas): 50 cabezas.
- Gallinas: 3.000 gallinas.
- Pollos de engorde: 8.000 cabezas.
- Otras aves de corral (perdices, codornices, patos): 4.000 cabezas.
- Conejas reproductoras: 600 cabezas.

ANEXO II

Condiciones que deben cumplir las actividades para ser consideradas inocuas

-Condiciones en relación con los ruidos y vibraciones:

1. Que la actividad cumpla con los niveles máximos de transmisión, aérea o estructural, en ambientes interiores o exteriores, establecidos en la normativa vigente en materia de ruido ambiental, sin emplear medidas correctoras, o bien empleando como única medida la simple absorción de sus paramentos y cubierta (cerramientos), evitando en este caso mantener parte de superficies abiertas, siempre y cuando el ruido generado no supere los 70 dB(A) como valor máximo en las condiciones más desfavorables.

No obstante, podrá superarse el límite anterior siempre que el ruido del recinto sea menor que 75 dB(A), y el nivel de aislamiento acústico mínimo sea el establecido por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

2. Que la actividad no disponga de motores o electromotores que precisen una potencia superior a 6,6 kW. La potencia se calculará por la suma de la potencia de cada uno de los motores que accionen las máquinas y aparatos existente en la actividad. No entraran en éste cómputo aquellos elementos no relacionados con producción, como

ascensores, alumbrado, instalaciones de ventilación forzada o instalaciones de aire acondicionado.

3. Que la actividad no cuente con equipos de aire acondicionado cuyas unidades compresoras se ubiquen fuera del local y tengan una potencia instalada superior a 6,6 kW.

- Condiciones en relación con los olores, humos y/o emanaciones:

4. Que en la actividad no se desarrollen combustiones u otros procesos físicos o químicos que originen emisiones de gases, vapores y polvos a la atmósfera, a salvo de lo dispuesto en el Punto 7. Cumplen esta condición las actividades en las cuales, para evitar humos y olores, sea suficiente con renovar el aire mediante soplantes.

5. Que la actividad no disponga de hornos eléctricos u otros electrodomésticos generadores de olores y/o humos cuya potencia sea superior a 5 kW o, siendo inferior, que la suma total de las potencias supere los 6,5 kW.

- Condiciones relativas a la contaminación atmosférica:

6. Que la actividad no esté incluida en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (CAPCA) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

- Condiciones relativas a las radiaciones ionizantes:

7. Que la actividad no sea susceptibles de emitir ninguna radiación ionizante.

- Condiciones referentes a los vertidos de aguas residuales:

8. Que la actividad no requiera autorización de vertido al alcantarillado por tratarse de aguas sanitarias o asimilables a ellas; o en caso contrario, que el vertido no precise una depuración previa.

- Condiciones relativas a la prevención y protección frente a incendios:

9. Que la carga térmica ponderada de la actividad sea inferior a 100 Mcal/m².

- Condiciones sobre manipulación de sustancias peligrosas o generación de residuos peligrosos y actividades potencialmente contaminantes del suelo:

10. Que la actividad no utilice, manipule, ni genere sustancias consideradas como peligrosas de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento (CE) 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación,

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006, o normativa que lo sustituya o complemente.

11. En el caso de que la actividad almacene productos químicos o combustibles envasados, que el local no supere los 200m² de superficie y que la cantidad almacenada no requiera autorización como APQ (almacenamiento de productos químicos).

12. Que la actividad no genere residuos peligrosos en cantidad superior a 10 Tm/año, según lo dispuesto en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, o normativa que lo sustituya o complemente.

13. Que la actividad no esté incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminantes del suelo

- Condiciones referentes al riesgo de legionelosis:

14. Que la actividad no disponga de instalaciones sujetas a programas de mantenimiento incluidas en el artículo 2 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, o normativa que lo sustituya o complemente.

ANEXO III

Instalaciones ganaderas de carácter doméstico

Se entenderá que las siguientes instalaciones ganaderas tienen carácter doméstico, y, en consecuencia, no constituyen “actividades” a los efectos de esta ley:

1. Instalaciones que comprendan una sola de las siguientes categorías de animales y cuya capacidad no supere en ningún caso la establecida a continuación:

- Dos cabezas de reproductores vacunos.
- Cuatro vacunos de cebo menores de un año.
- Dos equinos reproductores.
- Cuatro cerdas reproductoras.
- Seis cerdos de cebo
- Seis cabezas de ganado ovino o caprino.
- Diez conejas madres.
- Cuarenta aves (excluidas ratites).

2. Instalaciones en las que cohabiten especies de más de una de las categorías mencionadas en el número anterior, en cuyo caso el número máximo de animales de cada una de ellas se reducirá a la mitad.

Dieciocho.- Se modifica el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que queda redactado así:

“2. Se autoriza a/la Consejero/a competente en materia de medio ambiente para modificar los listados comprendidos en los anexos de esta ley”.

Capítulo 4

Actividad industrial, energética y minera

Artículo 4. *Puesta en servicio de instalaciones y establecimientos industriales.*

1. Para la puesta en servicio de las instalaciones y establecimientos, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que no requieran, de acuerdo con su normativa específica, autorización administrativa previa, los titulares de las instalaciones deberán presentar una declaración responsable al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en materia de seguridad industrial, en que manifiesten que cumplen los requisitos preceptivos, de acuerdo con los reglamentos y el resto de normativa aplicable en materia de seguridad industrial, y que se comprometen a mantener su cumplimiento durante la vida útil de las instalaciones.
2. En caso de que la declaración responsable citada por el apartado 1 haga referencia a un proyecto técnico, será preciso explicitar los datos necesarios para identificarlo.
3. El órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en materia de seguridad industrial establecerá mediante resolución los modelos de declaración responsable y los publicará en su sitio web.
4. En el caso de las industrias agrarias y alimentarias, la declaración responsable incluirá la información mínima necesaria a incorporar en la sección de Datos de Industrias Agrarias y Alimentarias del Registro de Establecimientos industriales de la Región de Murcia. Una copia de la misma, será enviada a la Consejería competente en materia de Industrias Agrarias y Alimentarias, al objeto de su inscripción de oficio en dicha sección.

5. La presentación de la declaración responsable a la que se refiere el apartado 1 habilita a los titulares de las instalaciones para ponerlas en funcionamiento con carácter inmediato, sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones que sean necesarias para el ejercicio de la actividad de la que forma parte la instalación. Las administraciones locales que deban habilitar el inicio de una actividad económica no podrán solicitar, a priori la presentación de documentación adicional ni establecer requisitos o trámites complementarios en materia de seguridad industrial con relación a dichas instalaciones. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, la Administración podrá regular un procedimiento a posteriori para comprobar lo declarado por el administrado”

Artículo 5. Nombramiento de directores facultativos en actividades mineras.

1. El titular o explotador legal de una actividad incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, deberá presentar ante el órgano competente en materia de minería, un escrito de designación de director facultativo suscrito por el empresario con la aceptación expresa del técnico propuesto y en el que figuren los datos identificativos y de contacto de la persona designada acompañado de una declaración responsable suscrita por el técnico designado en la que figuren lo siguientes aspectos:

a) Titulación, colegio profesional al que pertenece y número de colegiado.

b) Competencia que le asiste para el ejercicio de las funciones de director facultativo de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación que posee.

c) No estar incurso en causas de inhabilitación para el desarrollo de las funciones que la normativa vigente atribuye al director facultativo

d) No superar, con la presente designación, las limitaciones establecidas en el apartado 1.3.2, así como no sobrepasar el número máximo de diez canteras permitido en el apartado 1.3.4, de la ITC 02.0.01 o norma que la sustituya con indicación de la relación de canteras y otras explotaciones mineras en las que desarrolla la dirección facultativa, así como, en su caso, información sobre otras actividades no extractivas, permisos de exploración o de investigación, etc., en las que ejerce la dirección facultativa.

2. Analizada la conformidad de la documentación, el órgano competente en materia de minas procederá, en su caso, a aceptar la propuesta realizando la inscripción del director facultativo en el registro, así como a su notificación al explotador y al director facultativo.

Artículo 6. Puesta en Servicio de Maquinaria Minera Móvil y equipos de trabajo, Grupos Electrógenos y Líneas de Distribución en Explotaciones Mineras a cielo abierto e instalaciones elevadoras de aguas subterráneas en sondeos.

1. Las solicitudes de autorización de puesta en servicio de maquinaria minera móvil y equipos de trabajo en explotaciones mineras, grupos electrógenos y líneas de distribución en explotaciones mineras a cielo abierto, e instalaciones elevadoras de aguas subterráneas en sondeos, irán acompañadas de la documentación que corresponda según el caso, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación.

2. Una vez comprobado que la documentación aportada es conforme, el órgano competente extenderá de manera inmediata una diligencia en el reverso del Certificado del Técnico Titulado, Entidad Colaboradora de la Administración, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión emitido por instalador autorizado, o en el Certificado de Inspección Inicial emitido por Organismo de Control, según proceda, en la que se hará constar que a los efectos de los artículos 11 y 117 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, procede la puesta en Servicio de la maquinaria, equipo o instalación de que se trate.

Una vez presentada ante la Administración Minera la documentación necesaria para la puesta en servicio del establecimiento o instalación, el interesado podrá proceder a dicha puesta en servicio, bajo su responsabilidad y la de los autores de los correspondientes certificados, sin perjuicio de que la Administración Minera pueda adoptar las medidas de control y sancionadoras que puedan proceder.

En ningún caso el diligenciado del documento correspondiente de la inscripción del establecimiento o de la instalación supondrá por parte de la Administración Industrial la conformidad con los aspectos técnicos o reglamentarios del proyecto ni de ningún otro documento aportado. El referido documento de diligenciado y acreditación de la inscripción únicamente justificarán que el interesado ha presentado la documentación requerida formalmente de acuerdo con sus obligaciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponde asumir al autor del proyecto o documentación técnica sustitutiva, al director de obra, a la empresa instaladora y al resto de agentes intervinientes en tales actuaciones.

Artículo 7. Modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia:

Uno. Se modifica el artículo 22, que queda con la siguiente redacción:

“Artículo 22. Auditores energéticos y empresas de servicios energéticos.

1. Para el ejercicio de las actividades profesionales de auditor energético y proveedor de servicios energéticos se deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa estatal básica y aquella que se dicte en desarrollo de la misma.

2. Los auditores energéticos y las empresas de servicios energéticos se inscribirán en el Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia”.

Dos. Se modifica el artículo 32.1, c) que queda redactado como sigue:

“Artículo 32. Sanciones

c) Las infracciones leves con apercibimiento o con multa de hasta 30.000 euros. El apercibimiento sólo se podrá aplicar si la persona física o jurídica al que se le incoa el expediente sancionador no es reincidente”.

Capítulo 5

Medidas transversales

Artículo 8. Modificación de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los artículos de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que a continuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:

Uno. Se otorga nueva redacción a los apartados 1,5, 6 y 8 del Artículo 7:

“1. Los proyectos de interés estratégico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, referidos ya sea a nuevos proyectos, como a modificación de los existentes, serán declarados como tales por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de industria de la Región de Murcia.

5. Las solicitudes para la declaración de un proyecto de interés estratégico se realizarán a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cualquiera que sea el área de actividad en el que se incluya el proyecto, o que este tenga naturaleza transversal. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia podrá solicitar informes previos sobre la viabilidad e idoneidad del proyecto a la consejería competente en el área específica de actividad del mismo, así como a las competentes en materia de medio ambiente,

ordenación del territorio, empleo, patrimonio cultural e histórico, o administración local que se emitirán en el plazo de un mes.

6. El Instituto de Fomento solicitará al titular de la Consejería competente en materia de industria, la elevación de propuesta al Consejo de Gobierno para la declaración de proyecto de interés estratégico, previo informe de adecuación del proyecto a los requisitos y criterios establecidos en el artículo anterior, que será emitido por la Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, vistos entre otros, los informes preliminares a que hace referencia el apartado anterior.. Una vez declarados como tales se publicará la declaración, incluyendo el texto íntegro del acuerdo del Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia a los efectos de su general conocimiento.

8. El Instituto de Fomento ejercerá las competencias de coordinación y seguimiento, con los distintos órganos de las diferentes administraciones públicas, en la tramitación administrativa de los proyectos declarados de interés estratégico regional.”

Dos. Se modifica el artículo 8 apartado 4, otorgándole la siguiente redacción:

“4. Además de los que pudiera prever la legislación sectorial de aplicación, la declaración de proyecto de interés estratégico regional llevará aparejada la declaración de utilidad pública e interés social a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos que resulten afectados por las conexiones exteriores con las redes de infraestructuras, servicios generales, o de suministros de cualquier tipo, de carácter públicas o privadas, siempre que en este último caso, así se establezca en la propia declaración de proyecto de interés estratégico.”

Tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 9, otorgándoles la siguiente redacción:

“1. El titular de la Consejería competente en materia de industria informará periódicamente al Consejo de Gobierno sobre el estado de tramitación y, en su caso, de ejecución de los proyectos de interés estratégico de la Región.

2. Asimismo, para el impulso de la tramitación administrativa de los proyectos calificados de interés estratégico regional, los órganos de la Administración pública regional y de las entidades locales, proporcionarán al Instituto de Fomento de la Región de Murcia la información que les sea requerida sobre el estado de su tramitación.”

Artículo 9. Modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.

Se modifica el apartado 1 del artículo 10 bis de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, que queda redactado como sigue:

“1. Se crea la Unidad de Aceleración de Inversiones como unidad administrativa de información, coordinación e impulso de los proyectos empresariales que se desarrollen en la Región de Murcia y cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:

- a) Que supongan la generación de diez o más puestos de trabajo fijos a jornada completa.
- b) Que impliquen la realización de una inversión en activos fijos, excluidos terrenos y construcciones, por importe igual o superior a 400.000 euros.”

Artículo 10. *Creación de la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme*

1. Dependiente de la Consejería competente en materia de simplificación de la actividad empresarial, se crea la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme, como unidad administrativa encargada de establecer una interlocución coordinada e intermediación entre la Administración regional y las pymes y autónomos, en todo lo concerniente a la tramitación e impulso de los procedimientos administrativos relacionados con el inicio y desarrollo de la actividad empresarial.

2. Los diversos departamentos de la Administración Regional deberán atender con carácter preferente y urgente y como máximo en el plazo de diez días, las solicitudes de información formuladas por la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme.

3. El titular de la Consejería competente en materia de fomento del desarrollo económico, elevará al Consejo de Gobierno el informe anual elaborado por la citada Oficina descriptivo de las principales trabas y obstáculos que encuentran los empresarios en sus relaciones con la administración regional.

4. Se impulsará la celebración de convenios de colaboración con la Administración Local para el intercambio de la información relacionada con la actividad propia de la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme, articulación de instrumentos de identificación de trabas en la tramitación de los procedimientos administrativos relacionados con el inicio y desarrollo de la actividad empresarial, así como desarrollo de acciones de mejora dirigidas a la simplificación administrativa vinculada a la actividad empresarial.

Disposición adicional primera. *Modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.*

Se modifica la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, introduciendo al artículo 22.25 un segundo párrafo con la siguiente redacción:

“No será necesario el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que la Autoridad Laboral, que sea competente por razón de la materia, interponga ante los Juzgados de lo Social demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Tampoco será necesaria dicho acuerdo para que la Autoridad Laboral desista de sus pretensiones.”

Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se modifica la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, introduciendo al artículo 16 un nuevo apartado, el número 4, con la siguiente redacción:

“4. Cuando el titular de la Consejería ejerza como Autoridad Laboral interpondrá directamente ante los Juzgados de lo Social las demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, o desistirá de las mismas, no siendo necesario realizar las propuestas indicadas en la letra p) del apartado 2 de este artículo.

Al finalizar cada año natural la Autoridad Laboral emitirá un informe sobre las demandas o comunicaciones de oficio y desistimientos que se hayan planteado, y dará cuenta al Consejo de Gobierno”

Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los artículos de la Ley 4/2004 de 22 de octubre, de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que a continuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:

Uno. Se otorga nueva redacción al apartado d) del artículo 7.1:

“d) Propuestas dirigidas al órgano competente para el ejercicio o desistimiento de acciones jurisdiccionales por parte de la Administración Regional, o para el allanamiento de la

misma, excepto en los supuestos de demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social”.

Dos. Se otorga nueva redacción al apartado 1 del artículo 11:

“1. Excepto en los supuestos de demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el ejercicio de acciones, desistimiento o allanamiento en nombre de la Administración Regional y de sus organismos autónomos requerirá el informe previo de la Dirección de los Servicios Jurídicos. Este informe será, en su caso, previo a la declaración de lesividad, cuando ésta sea preceptiva.”

Disposición adicional cuarta. *Uso de medios electrónicos.*

En los procedimientos a que se refiere esta norma, la Administración regional usará preferentemente los medios electrónicos siempre y cuando, globalmente, no representen un coste mayor para los interesados, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal sobre el derecho de las personas de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Disposición adicional quinta. *Modelos de declaración responsable y de informe urbanístico.*

1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta norma, los ayuntamientos deberán hacer públicos el modelo o modelos de declaración responsable de actividad, y ponerlos a disposición de los interesados en su respectiva página Web.

2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma, la Consejería con competencias en materia de medio ambiente aprobará el modelo normalizado de solicitud de informe urbanístico municipal para las instalaciones que solicitan autorización ambiental integrada, así como los contenidos e instrucciones necesarias para que el informe pueda considerarse concluyente”.

Disposición adicional sexta.

Se inscribirán de oficio en la sección correspondiente del Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia, las industrias actualmente inscritas en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Disposición transitoria primera. *Proyectos de interés estratégico regional en trámite.*

1. Las solicitudes formuladas para la declaración de un proyecto de interés estratégico que a la entrada en vigor de Decreto Ley no hayan obtenido el acuerdo de declaración del proyecto de interés estratégico regional por el Consejo de Gobierno, continuarán su tramitación por parte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con arreglo a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. El seguimiento de los proyectos declarados de interés estratégico regional antes de la entrada en vigor de este Decreto Ley, corresponderá al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Disposición transitoria segunda. *Adaptación de las actividades al nuevo régimen de licencia y declaración responsable de actividad.*

1. Los procedimientos de licencia de actividad que a la entrada en vigor de esta norma se encuentren en trámite, seguirán su tramitación con arreglo al procedimiento aplicable al tiempo de su solicitud.

En el supuesto de que las actividades pasen con esta norma a estar sujetas a declaración responsable, el interesado podrá desistir del procedimiento de licencia y acogerse al régimen propio de la declaración responsable.

2. Las actividades que, estando en el ámbito de aplicación de la declaración responsable, cuenten con licencia de actividad a la entrada en vigor de esta norma, quedarán sometidas a partir de entonces al régimen jurídico aplicable a la declaración responsable. Las condiciones impuestas en las licencias de actividad tendrán la consideración de medidas correctoras o prescripciones técnicas de la actividad”.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Ley y, en concreto, las siguientes disposiciones:

- El artículo 8 del Decreto nº 284/2008, de 19 de septiembre, por el que se regula la competencia para resolver los expedientes sancionadores sobre infracciones en el orden social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Los artículos 4 y 5 del Decreto 65/1986, de 18 de julio, sobre distribución de competencias en materia de industrias agrarias y alimentarias entre las Consejerías de Industria, Comercio y Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- El apartado 2.3 del artículo 2 del Decreto 47/2003 de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia.
- Los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.
- Se derogan los siguientes artículos o partes de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:
 - Artículo 18.
 - Artículo 21.
 - Artículo 24.4.
 - Artículo 29.
 - Artículo 30.
 - Artículo 32.4 y 5.
 - Artículos 41 a 44.
 - Artículos 47 a 58.
 - Artículos 79 a 82.
 - Artículos 87 a 98.
 - Artículos 103 a 110.

Disposición final primera. *Adaptación de la normativa vigente.*

En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta norma, se iniciará la adaptación de las disposiciones reglamentarias vigentes a lo dispuesto en ella.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

El presente Decreto Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.



INFORME AL BORRADOR DE DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS

Remitido a este Servicio Jurídico el borrador de Decreto Ley (13-04-16) que se cita, a efectos de la emisión de Informe sobre el mismo, este Servicio Jurídico en uso de las funciones atribuidas por el artículo 11.1. a) del Decreto nº 26/2011, de 25 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Agua (actualmente Agua, Agricultura y Medio Ambiente), a continuación emite las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- Sobre el ámbito y alcance del presente informe

El presente informe se limita al ámbito competencial de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que se concreta en los siguientes.

- Medio Ambiente (Cap. 3.- Agilización en la tramitación ambiental, artículo 3, D. adicional tercera)
- Industria agroalimentaria (Cap. 4.- Actividad industrial, energética y minera, artículo 4, D. transitoria primera y D. derogatoria)

Segunda.- Sobre la utilización del Decreto Ley y su procedimiento de tramitación.

a) Sobre la utilización del Decreto Ley en la materia de medio ambiente.

- Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

En informe del pasado mes de enero el Servicio Jurídico informó sobre la posibilidad de incluir en el Decreto Ley las medidas de simplificación ambiental (modificación de la Ley 4/2009), emitiendo su juicio de tramitarlo como Proyecto de Ley.

No obstante, el órgano impulsor ha decidido, que, con un carácter provisional, en tanto no se apruebe una nueva ley de protección del medio ambiente, incluir en este Decreto Ley, una serie de modificaciones puntuales en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, cuya necesidad de modificación está más que justificada, como se refleja en apartado IV de la exposición de motivos y ya deviene desde su entrada en vigor (1 de enero de 2010), con motivo de la publicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su



ejercicio, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2006/123/CE.

b) Sobre la utilización del Decreto Ley en la regulación sobre las industrias agroalimentarias.

Se considera adecuado la utilización del Decreto Ley para la modificación que se pretende, aunque supone una elevación del rango regulatorio ya que la materia se encontraba regulada por Decreto.

c) Sobre el procedimiento.

En cuanto a la tramitación de los Decretos Ley, una vez comprobado que no existe en la normativa autonómica la regulación de un procedimiento para la tramitación de los mismos, este Servicio Jurídico considera que el expediente debería tener un contenido mínimo, que estaría configurado por:

- La MAIN (ya que está configurada como un documento que viene a recoger todos los informes que se consideran necesarios para una mejor comprensión y entendimiento de los proyectos normativos, contribuyendo a la mejora de la calidad normativa.)

En el presente caso, se ha optado por incorporar al expediente informes y propuestas de los centros directivos intervinientes, por entender que la MAIN no resulta exigible.

- Informes de otros centros directivos cuyas competencias tengan relación con las materias reguladas.

- Informe/s del/os Servicio/s Jurídico/s de la/s Consejería/s interviniente/s.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno debe remitirse a la Asamblea Regional para su convalidación.

Tercero.- Sobre el contenido.

a) Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

Las modificaciones propuestas afectan básicamente a las autorizaciones ambientales autonómicas y a la evaluación de impacto ambiental.

1) Respecto a la autorización ambiental integrada:

- Se precisan los criterios de modificación sustancial de actividades.



- Se simplifica la relación entre la autorización ambiental integrada y la licencia de actividad.

- Se ajusta al modelo estatal el régimen de la cédula de compatibilidad urbanística.

- Se suprime la consulta directa a los vecinos.

- Se suprime el informe de ECA en la comunicación previa de inicio de explotación.

2) Respecto a la autorización ambiental única:

- Se sustituye la autorización ambiental única por las autorizaciones ambientales sectoriales exigidas por la normativa estatal.

- Se desacopla la licencia de actividad del resto de autorizaciones y controles autonómicos.

- Se regula un nuevo régimen de licencia y declaración responsable de actividades.

3) Sobre la evaluación de impacto ambiental.

- Se realiza una remisión a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental.

4) Sobre las Disposiciones de la parte final.

- Se introducen dos disposiciones adicionales sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, y sobre los modelos de declaración responsable y de informe urbanístico.

- Se da nueva redacción a la Disposición transitoria segunda, para la adaptación al nuevo régimen de las autorizaciones ambientales sectoriales, y se introduce una nueva disposición transitoria octava, sobre la adaptación de las actividades al nuevo régimen de licencia y declaración responsable de actividad.

- Se modifica la Disposición final segunda para autorizar al Consejero competente para modificar los listados de los anexos de la Ley.

5) Sobre los Anexos.

Se da nuevo contenido a los Anexos I (actividades sometidas a licencia de actividad) II (condiciones que deben cumplir las actividades para ser consideradas inocuas) y III (instalaciones ganaderas de carácter doméstico).

Sobre dicho contenido este Servicio Jurídico realiza las siguientes consideraciones:

1) El desacoplar la licencia de actividad de las autorizaciones y controles autonómicos, podría ser contrario a lo dispuesto, en cuyo caso habría que considerar derogado, en el art. 22 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de



Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2) Al regular un nuevo régimen de licencia y declaración responsable de actividades, a este Servicio Jurídico le surgen dudas de si sólo estamos haciendo uso de las competencias ambientales o, si también de las competencias sobre régimen local.

3) La Disposición adicional tercera del Decreto Ley va en la línea de lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo

4) Remitimos a las consideraciones del informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

b) La regulación sobre las industrias agroalimentarias.

La modificación consiste en incluir en el Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia los datos que se incluían en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias, lo que hace innecesario este último Registro consiguiéndose una clara simplificación administrativa.

Por lo que se informa favorablemente con las consideraciones indicadas.

Murcia, a 14 de abril de 2016
El Jefe del Servicio Jurídico



INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS

La Dirección General de Producciones y Mercados Agroalimentarios tiene encomendadas las competencias en materia de industrias agrarias y alimentarias, en concreto las funciones de planificación, coordinación y control en lo referente a la ordenación y fomento de la industria agroalimentaria¹.

La propuesta de Decreto-Ley, en su preámbulo plantea abordar medidas estratégicas en materia industria, agilizando las cargas burocráticas con el fin de simplificar dichos trámites. En la actualidad las industrias agroalimentarias están sujetas a un doble registro y una doble presentación de documentos: El interesado en la inscripción de una industria alimentaria, presentaría un proyecto en la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (inscripción en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias) y otro en la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo (inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales).

En el artículo 5.4), capítulo 4 de la propuesta de Decreto-Ley, establece el nuevo mecanismo por el cual únicamente el beneficiario presentará una declaración responsable que incluirá la información adicional necesaria para su incorporación en la sección de Datos de Industrias Agrarias y Alimentarias del Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia, copia que será enviada a esta Dirección General para su inscripción de oficio.

En la disposición derogatoria, establece que los artículos 4 y 5 del Decreto 65/1986, sobre distribución de competencias en materia de industrias agrarias y alimentarias entre ambas Consejerías quedan derogados, dando respuesta a los objetivos de simplificación, agilizando las cargas burocráticas.

Es por ello que esta Dirección General no plantea observaciones e informa favorablemente a la tramitación de esta norma.

En Murcia a 17 de marzo de 2016

Vº Bº EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIONES Y
MERCADOS AGROALIMENTARIOS

EL JEFE DE SERVICIO DE INDUSTRIAS Y
PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

1 Decreto n.º 26/2011, de 25 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Agua.



INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA A LA PROPUESTA DE DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS.

Se procede a valorar la propuesta de Decreto-Ley de Medidas Urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, realizándose las siguientes consideraciones:

ARTÍCULO 3. MODIFICACIONES DE LA LEY 4/2009, DE 14 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

Apartado Doce. Nueva redacción del título III de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

1.- Artículo 59. Control preventivo de las actividades.

▪ En su apartado 4, no se consideran “actividades” a los efectos de la ley las instalaciones ganaderas de carácter doméstico que se enumeran en el anexo III, que comprenden aquellas cuya capacidad no supere en ningún caso dos cabezas de reproductores vacunos, cuatro vacunos de cebo menores de un año, dos equinos reproductores, cuatro cerdas reproductoras, seis cerdos de cebo, seis cabezas de ganado ovino o caprino, diez conejas madres o cuarenta aves (excluidas ratites); límites que se reducen a la mitad cuando en las instalaciones cohabitan especies de más de una de las categorías mencionadas.



A este respecto, cabe señalar, que la actual situación de crisis económica ha originado una proliferación de éstas pequeñas explotaciones que suponen una ayuda para sustento familiar, y cuyo único fin es el autoabastecimiento o autoconsumo.

Dada su finalidad eminentemente social, por la ayuda que supone para algunas economías domésticas, así como por su inocuidad para el medio ambiente, se considera acertado excluir estas prácticas ganaderas de la consideración de “actividad” con la consiguiente disminución de las cargas burocráticas que ello supone a la hora de regularizar estas instalaciones domésticas.

▪ En el apartado 5 del citado artículo 59 se añade la mención a las autorizaciones ganaderas, quedando así reflejada la exigencia establecida en la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, que indica que *“las explotaciones de animales de nueva instalación o la ampliación de las existentes deberán cumplir con las distancias mínimas que se establezcan respecto a poblaciones, carreteras, caminos y otras explotaciones o instalaciones que puedan representar una posible fuente o medio de contagio de enfermedades, además de disponer de la previa autorización de la autoridad competente.”*

2.- Artículo 70. Presentación de la declaración responsable de actividad.

Por sugerencia de esta Dirección General, en relación con la obligatoriedad de acompañar a la declaración responsable *“la justificación de haber obtenido las autorizaciones o formalizado las comunicaciones o declaraciones exigibles por la normativa de carácter sectorial”* (apartado 4.c), se ha suprimido la referencia a las materias sectoriales concretas.

La normativa sectorial existente que regula la autorización y el registro de las explotaciones de las distintas especies ganaderas establece la obligación de presentar la licencia de actividad previamente a su autorización; sin perjuicio de que dicha licencia sea sustituida por la declaración responsable en los casos que determine el presente borrador de Decreto-Ley, por lo que resulta procedente evitar en este apartado menciones a materias sectoriales concretas, como la ganadera o sanitaria, que podría dar pie a entender erróneamente que el control ganadero debe ser anterior a la declaración responsable.



Apartado Diecinueve. Nuevo contenido de los anexos I y II de la Ley 4/2009, de 14 de mayo.

ANEXO I. Actividades sometidas a Licencia de Actividad.

Con objeto de adecuar el apartado 6 del citado anexo a las denominaciones de la legislación sectorial en materia de ganadería se propuso una nueva denominación de las categorías de animales que se enumeren en el mismo y que han sido recogidas en el borrador del Decreto-Ley.

Para la determinación de los umbrales propuestos a partir de los cuales se debe solicitar la licencia de actividad, este organismo ha tenido en cuenta el tamaño medio de las explotaciones existentes en nuestra Región, así como criterios de rentabilidad productiva y el posible impacto medioambiental de dichas instalaciones.

ANEXO II. Condiciones que deben cumplir las actividades para ser consideradas inocuas.

De acuerdo con las consideraciones realizadas sobre el artículo 59 del borrador del Decreto-Ley, y en consonancia con su apartado 4 , en el que se exceptúan de ser consideradas actividades” determinadas instalaciones ganaderas , parece oportuno eliminar la referencia a las mismas en este anexo.

Por todo lo expuesto, consideramos que las sugerencias de esta Dirección General quedan incluidas en el borrador de Decreto-Ley que se valora, y entendemos que la aplicación del mismo resultará una herramienta de interés para el impulso de la ganadería, mediante la simplificación de las cargas burocráticas para la autorización de las instalaciones ganaderas.

Murcia, 31 de marzo de 2016
La Directora General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura,



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIBERALIZACIÓN Y DE LA SUPRESIÓN DE CARGAS BUROCRÁTICAS, TRASLADADA POR LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO.

Una vez consultados los servicios técnicos de esta Dirección General, se realizan las siguientes consideraciones sobre la propuesta de Decreto-Ley referida:

En lo concerniente al Capítulo 3. Agilización en la tramitación ambiental. Artículo 3. Modificaciones de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:

El borrador de Decreto-Ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas propuesto por la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo resume de la siguiente forma, en el apartado IV de su Exposición de Motivos, las novedades y justificación de las modificaciones que se propone introducir para agilizar la tramitación ambiental:

«Las medidas que se acometen de corte ambiental suponen una serie de modificaciones puntuales a la normativa vigente que, continuando en la línea simplificadora iniciada en años anteriores, se abordan con un carácter provisional en tanto no se apruebe una nueva ley de protección del medio ambiente acorde con las demandas de los diferentes agentes intervinientes.»

Los contenidos de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada han quedado desbordados por la sucesión de cambios normativos que la legislación ambiental estatal ha experimentado en los últimos años. Prácticamente todas las leyes ambientales básicas que fueron objeto de desarrollo por la Ley de Protección Ambiental Integrada se han visto afectadas por modificaciones profundas: la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, ha sido modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, transformando en indefinida y alterando la fisonomía de la



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

autorización ambiental integrada, como también lo ha hecho el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; las autorizaciones de residuos, integradas en la autorización ambiental única, han recibido nueva regulación con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y las autorizaciones de calidad del aire se han visto afectadas por la citada Ley 5/2013, de 11 de junio; y por lo que respecta a la evaluación ambiental, tanto de planes y programas como de proyectos, los cambios han sido aún más profundos por obra de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Al amparo de estas razones, la presente norma aborda las siguientes modificaciones de carácter ambiental. En el ámbito de las autorizaciones ambientales autonómicas, se derogarán los artículos o partes de ellos que son contrarios, incoherentes o desconectados de la normativa estatal reciente. Esto ocurre con toda la Sección IV del Capítulo II del Título II (arts. 41 a 44), pues la autorización ambiental integrada tiene actualmente duración indefinida, lo que excluye el régimen de solicitud de renovación o de caducidad. También se adaptan a la ley estatal de evaluación ambiental las reglas de coordinación entre la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental.

Por razones de seguridad jurídica, se precisan los criterios de modificación sustancial de actividades sometidas a autorización ambiental autonómica que, en el caso de la autorización ambiental integrada, están contenidos en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

Se simplifica la relación existente entre la autorización ambiental integrada y la licencia de actividad una vez que ésta había sido concedida, permitiendo al ayuntamiento introducir adaptaciones de las condiciones impuestas en el ámbito de la competencia local, sin necesidad de modificar la autorización ambiental integrada, con comunicación al órgano autonómico competente.

El régimen de la cédula de compatibilidad urbanística se ajusta al modelo estatal, en el que el informe urbanístico municipal no es obstativo para la tramitación del procedimiento, por lo que, si no se emite por el ayuntamiento en el plazo de un mes, se puede solicitar y tramitar la autorización ambiental integrada. Se salvan así los reparos que cabe oponer al régimen vigente, porque puede bloquear la solicitud de las autorizaciones por una inactividad municipal que no es achacable al promotor del proyecto (arts. 30 y 31.1.c). Se vuelve a la denominación de informe urbanístico



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

municipal, propia de la legislación estatal, en lugar de la denominación de cédula de compatibilidad urbanística, cuyo alcance ha creado confusión entre los operadores jurídicos. Para clarificar el alcance del informe, se encomienda a la Consejería con competencias en materia de medio ambiente la aprobación del modelo e instrucciones precisas.

Se suprime la consulta directa a los vecinos en el procedimiento de autorización ambiental integrada, trámite inusual (si no inexistente) en la regulación que de este procedimiento hacen el resto de Comunidades Autónomas. La participación de los afectados se garantiza mediante el trámite de información pública y, si el proyecto está sujeto a evaluación ambiental, mediante la participación prevista en dicho procedimiento.

En la comunicación previa de inicio de la explotación, se suprime la exigencia de informe de ECA, que ahora deberá presentarse en el plazo de dos meses desde el inicio de la actividad. Con el sistema actual, se establece siempre como obligatorio que dicho informe se emita cuando todavía no se cuenta con una experiencia de funcionamiento, lo que en ocasiones le priva de funcionalidad y obliga a exigir nuevos informes tras un periodo de funcionamiento, duplicando cargas y costes innecesariamente.

Pero ha sido en la autorización ambiental única donde se introduce una modificación de más calado que, resumidamente, consiste en desacoplar la licencia de actividad del resto de autorizaciones y controles autonómicos. El modelo actual de autorización ambiental única incorpora la licencia de actividad, siguiendo el mismo esquema de la autorización ambiental integrada, de forma que el promotor de la actividad no solicita separadamente la licencia de actividad, y los controles propios de la licencia de actividad se incorporan al procedimiento autonómico, a excepción del acto final del otorgamiento de la licencia, que concede el ayuntamiento cuando se notifica la autorización ambiental única. Esto conduce a que el Ayuntamiento deba participar intensamente en el procedimiento de autorización ambiental única mediante la cédula de compatibilidad urbanística, informando los aspectos de su competencia, haciendo las comunicaciones a los vecinos, etc. Pero en la experiencia de aplicación de la Ley 4/2009, esta integración autonómico-municipal se ha revelado contraproducente. La ventaja que para el promotor representa formular una única solicitud no compensa los inconvenientes derivados de flujo de comunicaciones que son necesarias entre ayuntamiento y órgano autonómico a lo largo del procedimiento. El resultado final es un retraso en la tramitación que se evitaría realizando procedimientos separados.



Con la nueva regulación, se vuelve a la obligación de pedir la licencia de actividad al ayuntamiento, y los controles e informes propios de la licencia ya no se integran en la autorización autonómica. Cada administración velará por la protección de los intereses públicos que tiene encomendados. Las autorizaciones se concederán, como es habitual en el Derecho administrativo español, sin perjuicio de otras autorizaciones, licencias o controles que sean necesarias para el lícito ejercicio de la actividad.

Dado este paso, se ha considerado innecesario mantener como tal la figura de la "autorización ambiental única"; pero se han mantenido los fines integradores de la Ley 4/2009, de modo que, cuando sea exigible más de una autorización ambiental sectorial, éstas deberán solicitarse conjuntamente y serán objeto de una sola resolución, que será desestimatoria si procediera denegar alguna de ellas. Además, las solicitudes de autorización ambiental sectorial se acompañarán de otras comunicaciones y declaraciones que deben formularse ante el órgano autonómico y que venían integrándose en la autorización ambiental única. El resultado es una integración efectiva del control ambiental autonómico, en un grado similar al existente en cuanto a la intervención autonómica se refiere. El promotor solo deberá presentar una solicitud ante el órgano ambiental para que éste realice todas las intervenciones que le corresponden, algo que no sucede en otras muchas Comunidades Autónomas.

Por razones de simplificación administrativa, y para evitar el mantenimiento de figuras de intervención propias no necesarias, el capítulo de la autorización ambiental única pasa a denominarse simplemente como Autorizaciones ambientales sectoriales, condensando en dos artículos, de manera sencilla, el nuevo esquema integrador.

...

Las actividades sujetas a licencia de actividad se recogen en el nuevo anexo I, que incluye todas aquellas que se consideran susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico, y en las que se resulta proporcionado el control previo a través de la licencia.

El capítulo III innova el ordenamiento regional con la necesaria regulación de la declaración responsable. Se ha procurado dejar claro en ella que el ayuntamiento conserva todas sus potestades y posibilidades de actuación para hacer cumplir la legalidad aplicable a la actividad, en cuanto a la comprobación (documental y física), la inspección, la imposición de medidas correctoras, la sanción y el restablecimiento de la legalidad. En las actividades sometidas a declaración responsable, el ayuntamiento



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

mantiene el mismo nivel de control que en las sujetas a licencia de actividad, solo alterándose el momento en que se lleva a cabo.

La declaración responsable debe acompañarse de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad, y señaladamente de una certificación emitida por técnico competente en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de aplicación, incluida la urbanística. No obstante, se regula el caso especial de las actividades inocuas, a las que no se exige el mencionado certificado, por cumplir condiciones rigurosas que hacen descartable cualquier incidencia ambiental y que se enumeran en el nuevo anexo II.

Por último, son inexcusable las modificaciones del régimen de la evaluación ambiental, tanto de planes y programas como de proyectos, al cual la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, ha afectado profundamente. Se trata de una ley completa y prácticamente agotadora de la materia, por lo que se opta por derogar casi por completo los dos títulos de la Ley ambiental que la desarrollaban. Se realizan remisiones a la legislación estatal y se mantienen determinaciones relativas a los órganos competentes y alguna cuestión adicional. Cabe destacar que se ha reflexionado sobre el órgano llamado a desempeñar la función de órgano sustantivo a efectos de evaluación de proyectos, con el resultado de atribuir a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo ese protagonismo en los proyectos afectados por la normativa de accidentes graves; y dando también mayor protagonismo a los ayuntamientos que tienen encomendada por la Ley de Bases de Régimen Local la competencia propia en materia de medio ambiente urbano, es decir, los de más de 50.000 habitantes».

Examinadas las modificaciones al articulado de la Ley 4/2009, incorporadas en el Capítulo 3 del borrador de Decreto-Ley, y consultados los servicios técnicos de este Centro Directivo, se informa:

Con carácter general el borrador de Decreto-Ley es acorde con la legislación básica en materia de autorizaciones ambientales autonómicas (integrada y sectoriales en materia de atmósfera, residuos y vertidos al mar), que corresponde otorgar a este Centro Directivo en virtud de las competencias atribuidas al mismo.

Se valora además como muy positivo que se mantengan los fines integradores de la LPAI en relación con las autorizaciones ambientales sectoriales, de modo que, cuando sea exigible más de una autorización ambiental sectorial, éstas deberán solicitarse



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

conjuntamente y serán objeto de una sola resolución, que será desestimatoria si procediera denegar alguna de ellas. Además, las solicitudes de autorización ambiental sectorial se acompañarán de otras comunicaciones y declaraciones que deben formularse ante el órgano autonómico y que venían integrándose en la autorización ambiental única. El resultado es una integración efectiva del control ambiental autonómico, en un grado similar al existente en cuanto a la intervención autonómica se refiere, **lo que mantiene el grado de seguridad jurídica para el interesado que ello supone y la optimización de los recursos que intervienen en la tramitación de dichas autorizaciones en el centro directivo.**

En relación con las modificaciones propuestas, cabe realizar las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIÓN PRIMERA: El artículo 85 fija las reglas para determinar el órgano sustantivo, estableciendo que esa condición corresponde, en primer lugar, al órgano que ostente las competencias competentes por razón de la materia para autorizar las actividades o industrias (minas, energía, carreteras, puertos, ganadería, residuos, etc.); en segundo lugar al órgano competente en materia de accidentes graves si la instalación está sometida al control de riesgos por accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas; y, en tercer lugar a los ayuntamientos de más de 50000 habitantes, en los supuestos en los que esté sometido a autorización ambiental sectorial y no se den los dos supuestos anteriores, recayendo la competencia finalmente en el resto de supuestos no sometidos a autorización ambiental sectorial en materia de residuos, atmósfera o vertidos al mar (es decir, las reguladas en la Ley 4/2009), sobre los en aquellos casos en que el proyecto no esté sometido a una autorización autonómica por razón de la materia, o al control de riesgos por accidentes graves, o a una autorización ambiental sectorial, a los ayuntamientos.

La ley estatal 21/2013, de evaluación ambiental, con carácter general, define como órgano sustantivo, aquél órgano de la administración pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en materias cuya competencia la ostenten distintos órganos de la Administración pública



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

estatal, autonómica o local, en cuyo caso, **se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquellas.**

Con esta premisa establecida en la legislación básica en materia de evaluación ambiental, este centro directivo debe ser órgano sustantivo exclusivamente cuando se trate de actividades de gestión de residuos, ya que en este caso sí se trata de una autorización propia con la finalidad del proyecto, regulada mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y por el Real Decreto 1481/2001, en materia de vertederos.

La ley 4/2009 establecía que, para instalaciones sujetas a autorización ambiental autonómica que no necesiten otra autorización autonómica por razón de la materia, el órgano ambiental autonómico actuaría como órgano sustantivo. Este modelo podría tener más o menos sentido por la visión integradora de las autorizaciones a través de la autorización ambiental única. Sin embargo, con el nuevo modelo propuesto en el texto que se acompaña, en el que la licencia de actividad o declaración responsable se desacopla de la tramitación de las autorizaciones ambientales sectoriales, no parece lógico que sea el órgano competente para otorgar una autorización de tipo instrumental, como es el caso de las autorizaciones en materia de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera o de vertidos al mar, y no por razón de la materia, el que ostente la condición de órgano sustantivo a efectos de la evaluación ambiental, que en la práctica supone no solo la realización del trámite de información pública y consultas junto con el proyecto de la actividad en las actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental ordinaria, sino también la vigilancia de las condiciones de la actividad.

Se considera por tanto adecuado que cuando la actividad no necesite el proyecto una autorización autonómica por razón de la materia (minas, energía, carreteras, puertos, ganadería, residuos) o no esté afectada por la normativa de accidentes graves, conforme a lo establecido en la ley 21/2013 (que establece como órgano sustantivo, aquél órgano de la administración pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o para controlar la actividad



de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa) la función de órgano sustantivo corresponda a los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes cuando la actividad esté sometida a una autorización ambiental autonómica en materia de prevención y control integrado o de atmósfera o de vertidos al mar, autorizaciones instrumentales todas ellas, ya que éstos serían los encargados del control de la licencia de actividad, o la comunicación previa o la licencia de obras, y ello está en coherencia con lo establecido en la normativa estatal en materia de evaluación ambiental.

En una siguiente fase de simplificación administrativa o cuando se aborde una nueva ley de protección ambiental integrada conforme indica el preámbulo del borrador de Decreto-Ley, **se debe seguir avanzando en la línea que marca la normativa básica estatal, en la que se establece que se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquellas.**

Y todo ello porque este centro directivo ostenta la condición de órgano ambiental en todos los supuestos recogidos en la normativa estatal en materia de evaluación ambiental de competencia autonómica por lo que seguir asumiendo además las competencias de órgano sustantivo en aquellas actividades sometidas a autorización ambiental sectorial de las reguladas en la Ley 4/2009, sobre las que no recaiga una autorización autonómica por razón de la materia o la actividad esté sometida al control de riesgos de accidentes graves, en el caso de que las actividades se desarrollen en municipios de menos de 50.000 habitantes, sigue suponiendo una carga adicional de trabajo para este centro directivo, al tener que realizar las funciones que la ley otorga al órgano sustantivo, además de las que ya asume como órgano ambiental en todos los supuestos recogidos en la normativa.

Es por ello que se reitera la importancia de abordar este asunto en siguientes fases de simplificación o en la nueva ley de protección ambiental integrada que se elabore, en la línea que ya se ha iniciado y en coherencia con la normativa básica estatal.



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

CONSIDERACIÓN SEGUNDA. En relación a las condiciones para ser consideradas las actividades como inocuas (Anexo II), conviene acompañar a la propuesta de Decreto-Ley la justificación de los argumentos que han servido de base para su determinación, y donde se haya realizado su análisis o valoración.

CONSIDERACIÓN TERCERA: En cuanto al Anexo I, respecto a los umbrales establecidos para las actividades ganaderas sujetas a licencia de actividad, se considera acertado que se haya solicitado informe al centro directivo competente en materia ganadera, ya que los umbrales que establece la legislación vigente se establecen en base a la carga equivalente ganadera.

CONSIDERACIÓN CUARTA. En cuanto a la supresión propuesta de la cédula de compatibilidad urbanística para el inicio de la tramitación de las autorizaciones ambientales sectoriales, se considera que no es competencia de este centro directivo la compatibilidad urbanística del uso o actividad que se evalúa o autoriza, aunque en ocasiones la existencia o no de dicha compatibilidad puede condicionar la tramitación o resolución de las autorizaciones ambientales sectoriales.

Esta supresión supone retornar al modelo anterior a la Ley 4/2009, en el que podía darse el caso de que el promotor obtuviera alguna autorización sectorial instrumental competencia de este centro directivo para la protección de un elemento ambiental como el aire, el suelo o el medio marino, por cumplir el proyecto con la legislación sectorial, pero nunca pudiera legalizarse la actividad por motivos urbanísticos.

También podría darse el caso de que se inicie un trámite y se invierta en la elaboración de estudios complejos por parte del interesado y que durante el trámite se obtenga un pronunciamiento del órgano competente en materia urbanística, que pudiera afectar a la tramitación o a la resolución, sin que haya sido advertido previamente por el interesado o su equipo consultor, y sin que se haya podido tomar por parte del inversor las decisiones adecuadas sobre alternativas de ubicación, sobre todo en el caso de nuevas inversiones.

En cualquier caso, no se realiza propuesta alternativa, por considerar que la Consejería proponente ya ha realizado estas reflexiones, y que ha prevalecido la



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

supresión de la carga burocrática y dilación de plazos que supone para el interesado la obligación de recabar por sí mismo del Ayuntamiento la emisión de dicha cédula, para acompañarla a la solicitud de inicio.

CONSIDERACIÓN QUINTA. En lo relativo al apartado once del artículo 3, que modifica el artículo 45.4 *“El plazo máximo para resolver y notificar las autorizaciones ambientales sectoriales será **de seis meses**, a contar desde la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud”*:

Se considera que siendo muy deseable poder resolver y notificar las autorizaciones ambientales sectoriales en un plazo menor que el establecido en la legislación básica estatal (**diez meses** en las autorizaciones en materia de residuos y **nueve meses** en las autorizaciones de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera), para que sea posible cumplir dicho plazo sin desatender o retrasar el resto de obligaciones del centro directivo competente, debe preverse la dotación de medios necesarios tanto informáticos y telemáticos como humanos.

A este respecto existe una disposición adicional undécima en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, que no se ve modificada por el borrador de Decreto-Ley, en la que se prevé la dotación de recursos humanos para garantizar la viabilidad de la ley, por lo que se considera que dichas necesidades serán atendidas.

En lo concerniente al Capítulo 5. Medidas transversales. Artículos 10 y 11

Se considera que, siendo medidas con una finalidad muy deseable, debe preverse los medios técnicos y humanos necesarios, ya que de otra forma, no podrán cumplirse los plazos establecidos, máxime en lo que se refiere a las competencias de esta Dirección General, pudiéndose producir un retraso en el despacho de otros expedientes, ya que si todos los expedientes de esta tipología que deben obtener un pronunciamiento del órgano ambiental tuvieran que ser despachados con la preferencia indicada por ser tramitados a través de dicha Oficina del autónomo y de la PYME o de la UNAI, podría darse el caso de que se generase una cola o cuello de botella que llevaría al incumplimiento de los plazos establecidos.



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental

En cualquier caso, las necesidades de medios en el órgano ambiental para cumplir con lo previsto en estos artículos, sin desatender el resto de obligaciones del centro directivo, serán puestas de manifiesto en el momento preciso.

Como ya hemos dicho, a este respecto ya existe una disposición adicional undécima en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, que no se ve modificada por el borrador de Decreto-Ley, en la que se prevé la dotación de recursos humanos para garantizar la viabilidad de la ley, por lo que se considera que la atención de dichas necesidades está prevista.

Murcia, a 14 de abril de 2016

LA DIRECTORA GENERAL DE
CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL



Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente

Secretaría General

V: 14/04/2016

COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARM

Salida nº:

39.996/2016

Fecha:

14-4-2016

COMUNICACIÓN INTERIOR

DE:	SECRETARIO GENERAL.
A:	SR. SECRETARIO GENERAL. CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO.

En relación a la propuesta del borrador del Decreto-Ley de Medidas Urgentes para la Reactivación de la Actividad Empresarial y del Empleo a través de la Liberalización y de la Supresión de Cargas Burocráticas se remiten, para su incorporación al expediente que se tramita, los siguientes informes:

-Informe de la Dirección General de Producciones y Mercados Agroalimentarios.

-Informe de la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.

-Informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

-Informe del Servicio Jurídico de la Secretaría General.

Murcia, a 14 de abril de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,

P.A.

A VICESECRETARIA,